

Boletín Oficial

de las Cortes de Castilla y León

II LEGISLATURA

AÑO VIII

17 de Febrero de 1990

Núm. 128

SUMARIO

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
I. TEXTOS LEGISLATIVOS			
Proyectos de Ley (P.L.)			
P.L. 24-IV			
INFORME de la Ponencia de la Comisión de Industria y Energía en el Proyecto de Ley de Seguridad Industrial de Castilla y León.	4450	D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a extremos relacionados con el reconocimien- to de grado personal a funcionarios, publi- cada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 108, de 20 de Octubre de 1989.	4481
TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.	4452		
Otras Normas			
P.R.R. 2-IV		P.E. 590-II	
INFORME de la Ponencia de la Comisión de Reglamento en la Propuesta de Reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León.	4455	CONTESTACION de la Junta de Castilla y León, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a extremos relacionados con el percibo de retribuciones complementarias por perso- nal laboral, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 109, de 30 de Octubre de 1989.	4482
TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.			
MODIFICACIÓN de los Apartados 2 y 6 del Artícu- lo 60 del ESTATUTO DE PERSONAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.	4456	P.E. 593-II	
IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES		CONTESTACION de la Junta de Castilla y León, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a nombramiento del Inspector General de Ser- vicios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 109, de 30 de Octubre de 1989.	4483
Contestaciones			
P.E. 586-II		P.E. 601-II	
CONTESTACION de la Junta de Castilla y León, a la Pregunta formulada por el Procurador		CONTESTACION de la Junta de Castilla y León a la pregunta con respuesta escrita, formulada	

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
por el Procurador D. Angel F. García Cantalejo, relativa a terminación de las obras de acondicionamiento de los márgenes del río Eresma en el Barrio de San Lorenzo de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 113, de 20 de Noviembre de 1989.	4483	D. Francisco Javier Paniagua Iñiguez, relativa a extremos relacionados con las informaciones sobre la firma de un crédito con el Banco Europeo de Inversiones, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 119, de 18 de Diciembre de 1989.	4484
P.E. 603-II		P.E. 615-II	
CONTESTACION de la Junta de Castilla y León a la pregunta con respuesta escrita, formulada por el Procurador D. Lorenzo López Trigal, relativa a ocupación ilegal de la cañada real de Arcahueja (León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 113, de 20 de Noviembre de 1989.	4483	CONTESTACION de la Junta de Castilla y León a la pregunta con respuesta escrita, formulada por el Procurador D. Pedro San Martín Ramos, relativa a previsión sobre ayudas y cantidades a suprimir en los programas de la Operación Integrada de Desarrollo de Zamora y Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 119, de 18 de Diciembre de 1989.	4485
P.E. 610-II		P.E. 619-II	
CONTESTACION de la Junta de Castilla y León, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional en la provisión de vacantes en régimen de contratación laboral, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 119, de 18 de Diciembre de 1989.	4484	CONTESTACION de la Junta de Castilla y León, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a asistencia del Director General de la Función Pública y del Jefe del Servicio de Selección y Formación a un Seminario de Informática Básica en Madrid, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 121, de 30 de Diciembre de 1989.	4486
P.E. 613-II			
CONTESTACION de la Junta de Castilla y León, a la Pregunta formulada por el Procurador			

I. TEXTOS LEGISLATIVOS

Proyectos de Ley

P.L. 24-IV

PRESIDENCIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación del Informe emitido por la Ponencia de la Comisión de Industria y Energía en el Proyecto de Ley de Seguridad Industrial de Castilla y León, P.L. 24-IV.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de Febrero de 1989.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: *Carlos Sánchez-Reyes de Palacio*

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: *Juan C. Elorza Guinea*

A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA

La Ponencia encargada de redactar el informe sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Industrial de Castilla y León,

integrada por los señores Procuradores D. Vicente Bosque Hita y D. Fernando Terrón López por el Grupo Parlamentario Popular, D. Juan Antonio Lorenzo Martín y D. Miguel Valcuende González por el Grupo Parlamentario Socialista, D. Pedro San Martín Ramos y D. Guillermo Domínguez Ferrer por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social ha estudiado con todo detenimiento dicho Proyecto de Ley, así como las enmiendas presentadas al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, elevan a la Comisión el siguiente:

INFORME

Antes de entrar en el estudio pormenorizado de los artículos, la Ponencia adopta el criterio de que aquellas enmiendas sobre las que no recayera un pleno acuerdo entre los Ponentes, o que no fueran retiradas por los Ponentes del Grupo Parlamentario autor de las mismas, se entenderán apoyadas por el Grupo Parlamentario que las presentó, reservándose su futuro debate y votación para Comisión.

ARTICULADO

ARTICULO UNO:

— Al artículo 1 del proyecto no se han presentado enmiendas.

ARTICULO DOS:

— La Enmienda núm. 1 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuencia se traslada a Comisión para su debate y votación.

— La Enmienda núm. 2 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social ha sido retirada por sus proponentes.

ARTICULO TRES:

— La Enmienda núm. 3 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social ha sido aceptada con nueva redacción. En consecuencia el artículo tres resulta del siguiente tenor:

“Artículo 3. Las instalaciones industriales deberán ser proyectadas, ejecutadas, utilizadas y mantenidas de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos para las personas y las cosas incluido el medio ambiente.

Entre los riesgos a controlar se encuentran los siguientes:

- Explosión, incendio y quemaduras.
- Electrocutación.
- Envenenamiento y asfixia.
- Contaminación por: ruido, polución, vibraciones etc.
- Radiación.
- Daños físicos a personas o bienes.
- Lesiones con productos químicos.
- Cualquier otro contemplado por reglamentaciones específicas”.

ARTICULO CUATRO:

— La Enmienda núm. 4 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social ha sido retirada por sus proponentes.

ARTICULO CINCO:

— No se han presentado enmiendas.

ARTICULO SEIS:

— La Ponencia acuerda la siguiente corrección técnica: introducir a partir de “..pertinentes..” la siguiente expresión: “..en materia de seguridad industrial..”. En consecuencia el Artículo seis resulta del siguiente tenor literal:

“Artículo 6. La Consejería de Economía y Hacienda podrá regular los procedimientos a seguir para conceder las autorizaciones pertinentes en materia de seguridad industrial con el fin de adaptarlos a la Organización Administrativa de la Comunidad Autónoma”.

ARTICULO SIETE:

— No se han presentado enmiendas.

ARTICULO OCHO:

— No se han presentado enmiendas.

ARTICULO NUEVE:

— La Enmienda núm. 5 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social ha sido aceptada por la Ponencia con nueva redacción. En consecuencia se crea el apartado cuatro del siguiente tenor literal:

“4. Las entidades concesionarias, sus directores y su personal no podrán ser suministradores, constructores, administradores, instaladores, ni proyectistas de las instalaciones, máquinas, aparatos y elementos de construcción que deban inspeccionar y controlar y tampoco podrán ser mandatarios de los susodichos proyectistas, constructores, suministradores e instaladores”.

ARTICULO DIEZ:

— No se han presentado enmiendas.

ARTICULO ONCE:

— No se han presentado enmiendas.

ARTICULO DOCE:

— La Enmienda núm. 6 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social ha sido aceptada en sus propios términos por la Ponencia. En consecuencia después del apartado 2 se introduce un nuevo apartado 3 modificando la numeración correlativa de los demás apartados, del siguiente tenor literal:

“3. La Junta de Castilla y León podrá ordenar, como medida cautelar, la paralización de la actividad de las instalaciones que no cuenten con las correspondientes autorizaciones, que no estén inscritas en los registros preceptivos o que incumplan los requisitos exigidos por razones de seguridad. La paralización se mantendrá mientras persista la situación irregular”.

4. Desde “Por Decreto...” hasta “...las mismas”.

5. Desde “Dentro de los límites...” hasta “...reincidencia”.

— Al apartado 4, convertido en 5 por la aceptación de la Enmienda anterior, se presentó la Enmienda núm. 7 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, que fue aceptada por la Ponencia y, por lo tanto el apartado 5 del artículo queda redactado del siguiente tenor literal:

“5. Dentro de los límites establecidos en el apartado primero, la cuantía de las sanciones se establecerá en función del riesgo que comportan para las personas, las cosas y el medio y, en su caso, la reincidencia”.

DISPOSICION FINAL:

— No se han presentado enmiendas.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

— La Ponencia admite una enmienda técnica en el

segundo apartado del siguiente tenor: Se introduce en el texto a partir de "...sobre Liberalización Industrial.." lo siguiente:

"...el Real Decreto 2585/1980 de 17 de octubre sobre Liberalización y Nueva Regulación de las Industrias Agrarias, por el Decreto 82/1989 de 18 de mayo de la Junta de Castilla y León sobre competencias en materia de industrias agrarias y alimentarias..."

Fdo.: *Vicente Bosque Hita*

Fdo.: *Fernando Terrón López*

Fdo.: *Juan Antonio Lorenzo Martín*

Fdo.: *Miguel Valcuende González*

Fdo.: *Pedro San Martín Ramos*

Fdo.: *Guillermo Domínguez Ferrer*

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEON

La complejidad de las instalaciones industriales como consecuencia de los avances tecnológicos, de la fabricación de nuevos productos y de la calidad de vida, hacen que el riesgo potencial de accidentes para las personas y las cosas haya aumentado en muchos casos y que su control e inspección resulte más difícil y haya de ser realizado por personal especializado, dotado de equipos y medios materiales específicos. Por otra parte, la competencia entre las diferentes empresas, dentro de la Economía de Mercado en que nos movemos, hace que puedan no ser utilizados todos los medios que las nuevas tecnologías ponen a disposición de los industriales a fin de disminuir los riesgos de accidentes. En base a estas consideraciones es necesario que la Administración ponga en marcha los medios de inspección y control necesarios, con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones industriales y disminuir los riesgos de accidentes, evitando por otra parte, la posible competencia desleal entre las diferentes empresas afectadas, que en último término, derivarían en una menor seguridad de dichas instalaciones.

La regulación genérica de las instalaciones industriales está definida por el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre Liberalización Industrial, el Real Decreto 2685/1980 de 17 de octubre sobre Liberalización y Nueva Regulación de las Industrias Agrarias, por el Decreto 82/1989 de 18 de mayo de la Junta de Castilla y León sobre competencias en materia de industrias agrarias y alimentarias y, por el Decreto 1775/67, de 22 de julio, sobre el Régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias en aquellos artículos no derogados por el anterior. Ambos Decretos tienen su base legal en la Ley de 24 de

noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria, que sigue vigente en gran parte de su contenido, a pesar de los años transcurridos y de los avances tecnológicos que en los mismos se han producido.

Teniendo en cuenta la legislación antes mencionada, así como los Reglamentos específicos correspondientes a cada instalación industrial, se hace preciso una reorientación y ordenación de los procedimientos administrativos, en aras de una mayor eficacia, adecuándolos a la estructura administrativa y a las posibilidades reales de la Administración Autónoma, en el ámbito de sus competencias.

Igualmente hay que destacar que determinados Reglamentos, no contemplan expresamente el régimen sancionador, lo que hace de muy difícil aplicación su contenido, teniendo que recurrir a la legislación general a éstos efectos, lo que no siempre es posible con la legislación vigente. En aquellos Reglamentos cuyo procedimiento sancionador está claramente definido en lo relativo a infracciones y cuantías de las sanciones, existen problemas de aplicación, por figurar como autoridad competente para imponer las sanciones: los Delegados Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, los Directores Provinciales de dicho Ministerio, los Gobernadores Civiles o los Directores Generales del Ministerio de Industria y Energía, cuando según el Real Decreto 1779/84, de 18 de julio de transferencias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, estas sanciones serán impuestas por la Administración Autónoma. En consecuencia con este aspecto se hace necesario adecuar la legislación a la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma.

En base a todo lo anteriormente indicado y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y los Reales Decretos 2571/1982, de 24 de julio y 1779/84, de 18 de julio, de transferencia de competencias en materia de Industria, Energía y Minas, sin perjuicio de las competencias de la Administración Local, la presente Ley define la actuación administrativa en materia de seguridad de las instalaciones industriales. Establece las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen en el proyecto, construcción, dirección de obra, mantenimiento, etc. de dichas instalaciones, a la vez que define las sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa vigente y específica, la autoridad competente en cada caso para imponer las mismas, teniendo en cuenta la estructura de la Administración Autónoma.

Artículo 1.

El objeto de la presente ley es regular la actuación de la Administración Autónoma, con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones industriales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro del ámbito de las competencias establecidas por el Estatuto de Autonomía y sin perjuicio de las que corresponden a la Administración Local.

Artículo 2.

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por instalación industrial:

- a) El conjunto de elementos y equipos que tienen por objeto: generar, transportar, transformar, almacenar y utilizar la energía en todas sus formas.
- b) El conjunto de elementos y equipos que tienen por objeto: producir, transportar, manipular y almacenar productos industriales.

2. Se entiende por producto industrial el obtenido por manipulación o transformación de cualquier materia prima o los procedentes de la extracción minera.

Artículo 3.

Las instalaciones industriales deberán ser proyectadas, ejecutadas, utilizadas y mantenidas de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos para las personas y las cosas incluido el medio ambiente.

Entre los riesgos a controlar se encuentran los siguientes:

- Explosión, incendio y quemaduras.
- Electrocuación.
- Envenenamiento y asfixia.
- Contaminación por: ruido, polución, vibraciones, etc.
- Radiación.
- Daños físicos a personas o bienes.
- Lesiones con productos químicos.
- Cualquier otro contemplado por reglamentaciones específicas.

Artículo 4.

Se considerará que la seguridad de las instalaciones queda garantizada y los riesgos reducidos al mínimo, cuando se den las siguientes circunstancias:

1. Que sean utilizadas para los fines que fueron construidas o aquellos que les sean propios.
2. Que hayan sido proyectadas, ejecutadas y mantenidas conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.
3. Que hayan obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes que les sean de aplicación y cumplan las prescripciones que se les haya impuesto o que exija la normativa vigente.
4. Que de no existir una reglamentación específica que les sea aplicable, se adopten las normas de seguridad generalmente reconocidas y que se justifique en el proyecto técnico, que la seguridad de la instalación queda garantizada.

Artículo 5.

Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, en el ámbito de las competencias establecidas por el Estatuto, velar por el cumplimiento de las normas establecidas por la presente Ley, así como la inspección y el control del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 4.

Artículo 6.

La Consejería de Economía y Hacienda podrá regular los procedimientos a seguir para conceder las autorizaciones pertinentes en materia de Seguridad Industrial, con el fin de adaptarlos a la Organización Administrativa de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7.

Serán responsables del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 4:

1. El autor del proyecto, de que éste se adapte a la normativa que le sea de aplicación.

2. El Técnico que emita el certificado final de obras, de que la instalación se haya ejecutado conforme al proyecto y se hayan cumplido las normas de seguridad en la ejecución. Si el Técnico que emite el certificado, pertenece a una empresa, ésta se considera responsable subsidiariamente.

3. Las Empresas Instaladoras y Mantenedoras, de que la instalación y el mantenimiento se hayan ejecutado cumpliendo la normativa vigente, y, en su caso, el proyecto técnico. El instalador y el mantenedor, serán también responsables en los mismos términos que la empresa instaladora y la empresa mantenedora.

4. El titular de la instalación, de que la misma se utilice y se mantenga conforme a la normativa que le sea de aplicación y a las instrucciones impuestas, así como de que se realicen aquellas inspecciones y controles obligatorios, y, en su caso se contrate el mantenimiento con una empresa autorizada.

5. Cuando en aplicación de la presente Ley, dos o más Entidades o personas, resulten responsables de una misma infracción, se considerarán solidarias a efectos de las sanciones que se deriven.

Artículo 8.

La inspección y el control, que según el Artículo 5 corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda, podrán ser realizados, directamente por dicha Consejería o por medio de Entidades Concesionarias, cuyos certificados, tendrán igual valor que los emitidos por la Administración.

Las inspecciones podrán realizarse de oficio o a instancia de parte. Las Entidades Concesionarias deberán dar cuenta a la Administración de todas sus actuaciones en la forma y condiciones que se establezca en la Concesión.

Artículo 9.

1. Para poder acceder a la concesión, las Entidades deberán estar inscritas en el Registro General de Entidades de Inspección y Control Reglamentario, conforme establece el Real Decreto 1.407/1987, de 13 de noviembre, por el que se regulan las Entidades de Inspección y Control Reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales, sin perjuicio de que puedan concursar antes de obtener la inscripción.

2. La concesión se efectuará por Reglamentos de Seguridad, debiendo la Entidad que opte a la concesión, estar autorizada como Entidad de Inspección y Control, para todos aquellos que se establezcan en las bases de la misma.

3. Las condiciones técnicas exigidas para las Entidades de Inspección y Control Reglamentario por el Real Decreto 1.407/1987, a que anteriormente se ha hecho referencia, tendrán el carácter de mínimas, a efectos de las exigidas para las Entidades Concesionarias, que quedarán establecidas en las bases de la Concesión.

4. Las entidades concesionarias, sus directores y su personal no podrán ser suministradores, constructores, administradores, instaladores ni proyectistas de las instalaciones, máquinas, aparatos y elementos de construcción que deban inspeccionar y controlar y tampoco podrán ser mandatarios de los susodichos proyectistas, constructores, suministradores e instaladores.

Artículo 10.

Se considerarán infracciones en materia de Seguridad de las instalaciones industriales:

1. Incumplir la normativa vigente que le sea de aplicación o las instrucciones dictadas por la Administración competente.

2. Expedir certificaciones en relación con el proyecto, la realización de la obra, las inspecciones, la conservación, el mantenimiento, etc., de forma negligente o falsa.

3. No contratar el mantenimiento de aquellas instalaciones que estén obligadas por la normativa vigente.

4. No realizar las revisiones exigidas por las reglamentaciones específicas, a que estén obligadas.

Artículo 11.

Las infracciones contempladas en la presente Ley se gradúan en: leves, graves y muy graves, en relación con los riesgos producidos, el grado de intencionalidad y la reincidencia.

1. Se considerarán infracciones leves, aquéllas que supongan un incumplimiento de alguna de las prescripciones establecidas, siempre que de las mismas no se derive una disminución en la seguridad de las instalaciones.

2. Se considerarán infracciones graves:

a) El incumplimiento de alguna prescripción técnica de seguridad exigida por la normativa vigente, siempre que la misma no suponga un peligro inminente para las personas o las cosas.

b) La puesta en marcha de las instalaciones sin las autorizaciones preceptivas.

c) La instalación de equipos o aparatos que estando sometidos a homologación o aprobación de tipo se instalen sin haberlas obtenido.

d) La expedición de certificaciones o documentos de forma incorrecta, negligente o falsa.

e) El incumplimiento reiterado en la presentación de datos que sean solicitados por la Administración.

f) No contratar el mantenimiento de aquellas instalaciones que estén obligadas a ello, o hacerlo con empresas no autorizadas.

g) No realizar las revisiones que exija la normativa específica.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

a) Aquellas infracciones que puedan suponer un riesgo inminente para las personas o las cosas.

b) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

c) La emisión dolosa de certificaciones o informes incorrectos.

Artículo 12.

1. Las infracciones en materia de seguridad industrial podrán ser sancionadas, por vía administrativa, en función del riesgo que comporte para las personas o las cosas y la reincidencia, conforme a la siguiente graduación:

a) Infracciones leves, hasta 100.000 pts.

b) Infracciones graves, entre 100.001 pts. y 500.000 pts., pudiendo llevar aparejada la suspensión de actividades por un período máximo de seis meses para aquellas empresas que han de estar autorizadas e inscritas en los Registros Administrativos específicos.

c) Infracciones muy graves, entre 500.001 pts. y 5.000.000 de pts., pudiendo llevar aparejada la suspensión de actividades por un período máximo de cinco años, para aquellas empresas que han de estar autorizadas e inscritas en los Registros Administrativos específicos.

2. Las cuantías anteriormente establecidas, podrán ser actualizadas por Decreto de la Junta de Castilla y León.

3. La Junta de Castilla y León podrá ordenar, como medida cautelar, la paralización de la actividad de las instalaciones que no cuenten con las correspondientes autorizaciones, que no estén inscritas en los registros preceptivos o que incumplan los requisitos exigidos por razones de seguridad. La paralización se mantendrá mientras persista la situación irregular.

4. Dentro de los límites establecidos en el apartado primero, la cuantía de las sanciones se establecerá en función del riesgo que comportan para las personas, las cosas y el medio y, en su caso, la reincidencia.

5. Dentro de los límites establecidos en el punto 1 anterior, la cuantía de las sanciones se establecerá en función del riesgo que comporten para las personas y las cosas y la reincidencia.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar por Decreto las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar la presente Ley.

Otras Normas

P.R.R. 2-IV

PRESIDENCIA

De Conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación del Informe de la Ponencia de la Comisión de Reglamento en la Propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, P.R.R. 2-IV

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: *Carlos Sánchez-Reyes de Palacio*

A LA COMISION DE REGLAMENTO

La Ponencia encargada de redactar el informe sobre la propuesta de Reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, de Centro Democrático y Social y Mixto, integrada por los señores Procuradores D. José Nieto Noya por el Grupo Parlamentario Popular, D. Jesús Quijano González por el Grupo Parlamentario Socialista, D. Jorge V. Póliz Laguna por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social ha estudiado con todo detenimiento dicha Propuesta de Reforma, así como las enmiendas presentadas al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, elevan a la Comisión el siguiente:

I N F O R M E

Antes de entrar en el estudio pormenorizado de los artículos, la Ponencia adopta el criterio de que aquellas enmiendas sobre las que no recayera un pleno acuerdo entre los Ponentes, o que no fueran retiradas por los Ponentes del Grupo Parlamentario autor de las mismas, se entenderán apoyadas por el Grupo Parlamentario que las presentó, reservándose su futuro debate y votación para Comisión.

A R T I C U L A D O

ARTICULOS UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ, ONCE, DOCE, TRECE, CATORCE, QUINCE, DIECISEIS Y DIECISIETE:

- A estos artículos no se han presentado enmiendas.

ARTICULO DIECIOCHO:

- Al artículo 18 se presentó la Enmienda núm. 1 del

Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social que ha sido retirada por sus proponentes.

ARTICULOS DIECINUEVE, VEINTE Y VEINTIUNO:

- A estos artículos no se han presentado enmiendas.

ARTICULO VEINTIDOS:

- Al artículo 22 se presentó la Enmienda núm. 2 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social que ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuencia se suprime el apartado tres de este artículo.

ARTICULOS VEINTITRES, VEINTICUATRO, VEINTICINCO, VEINTISEIS, VEINTISIETE, VEINTIOCHO, VEINTINUEVE, TREINTA, TREINTA Y UNO, TREINTA Y DOS, TREINTA Y TRES, TREINTA Y CUATRO, TREINTA Y CINCO Y TREINTA Y SEIS:

- A estos artículos no se han presentado enmiendas.

ARTICULO TREINTA Y SIETE:

- A este artículo se presentó la Enmienda núm. 3 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social que fue retirada en Ponencia por sus proponentes.

ARTICULO TREINTA Y OCHO:

- A este artículo se presentó la Enmienda núm. 4 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social que fue retirada en Ponencia por sus proponentes.

ARTICULO TREINTA Y NUEVE:

- A este artículo se presentó la Enmienda núm. 5 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social que fue retirada en Ponencia por sus proponentes.

ARTICULOS CUARENTA, CUARENTA Y UNO, CUARENTA Y DOS, CUARENTA Y TRES, CUARENTA Y CUATRO, CUARENTA Y CINCO, CUARENTA Y SEIS, CUARENTA Y SIETE, CUARENTA Y OCHO, CUARENTA Y NUEVE, CINCUENTA, CINCUENTA Y UNO, CINCUENTA Y DOS, CINCUENTA Y TRES, CINCUENTA Y CUATRO, CINCUENTA Y CINCO, CINCUENTA Y SEIS, CINCUENTA Y SIETE, CINCUENTA Y OCHO, CINCUENTA Y NUEVE, SESENTA, SESENTA Y UNO, SESENTA Y DOS, SESENTA Y TRES, SESENTA Y CUATRO, SESENTA Y CINCO, SESENTA Y SEIS, SESENTA Y SIETE, SESENTA Y OCHO, SESENTA Y NUEVE, SETENTA, SETENTA Y UNO, SETENTA Y DOS, SETENTA Y TRES, SETENTA Y CUATRO, SETENTA Y CINCO, SETENTA Y SEIS, SETENTA Y SIETE, SETENTA Y OCHO, SETENTA Y NUEVE, OCHENTA, OCHENTA Y UNO, OCHENTA Y DOS, OCHENTA Y TRES, OCHENTA Y CUATRO, OCHENTA Y CINCO, OCHENTA Y SEIS, OCHENTA Y SIETE, OCHENTA Y OCHO, OCHENTA Y NUEVE, NOVENTA, NOVENTA Y UNO, NOVENTA Y DOS, NOVENTA Y TRES, NOVENTA Y CUATRO, NOVENTA Y CINCO, NOVENTA Y SEIS, NOVENTA Y SIETE, NOVENTA Y OCHO, NOVENTA Y NUEVE, CIEN, CIENTO UNO Y CIENTO DOS:

- A estos artículos no se han presentado enmiendas.

ARTICULO CIENTO TRES:

- A este artículo se presentó la Enmienda núm. 6 del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social que fue retirada en Ponencia.

ARTICULOS CIENTO CUATRO, CIENTO CINCO, CIENTO SEIS, CIENTO SIETE, CIENTO OCHO, CIENTO NUEVE, CIENTO DIEZ, CIENTO ONCE, CIENTO DOCE, CIENTO TRECE, CIENTO CATORCE, CIENTO QUINCE, CIENTO DIECISEIS, CIENTO DIECISIETE, CIENTO DIECIOCHO, CIENTO DIECINUEVE, CIENTO VEINTE, CIENTO VEINTIUNO, CIENTO VEINTIDOS, CIENTO VEINTITRES, CIENTO VEINTICUATRO, CIENTO VEINTICINCO, CIENTO VEINTISEIS, CIENTO VEINTISIETE, CIENTO VEINTIOCHO, CIENTO VEINTINUEVE, CIENTO TREINTA, CIENTO TREINTA Y UNO, CIENTO TREINTA Y DOS, CIENTO TREINTA Y TRES, CIENTO TREINTA Y CUATRO, CIENTO TREINTA Y CINCO, CIENTO TREINTA Y SEIS, CIENTO TREINTA Y SIETE, CIENTO TREINTA Y OCHO, CIENTO TREINTA Y NUEVE, CIENTO CUARENTA, CIENTO CUARENTA Y UNO, CIENTO CUARENTA Y DOS, CIENTO CUARENTA Y TRES, CIENTO CUARENTA Y CUATRO, CIENTO CUARENTA Y CINCO, CIENTO CUARENTA Y SEIS, CIENTO CUARENTA Y SIETE, CIENTO CUARENTA Y OCHO, CIENTO CUARENTA Y NUEVE, CIENTO CINCUENTA, CIENTO CINCUENTA Y UNO, CIENTO CINCUENTA Y DOS, CIENTO CINCUENTA Y TRES, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO, CIENTO CINCUENTA Y CINCO, CIENTO CINCUENTA Y SEIS, CIENTO CINCUENTA Y SIETE, CIENTO CINCUENTA Y OCHO, CIENTO CINCUENTA Y NUEVE, CIENTO SESENTA, CIENTO SESENTA Y UNO, CIENTO SESENTA Y DOS Y CIENTO SESENTA Y TRES:

- A estos artículos no se han presentado enmiendas.

DISPOSICIONES FINALES:

- No se han presentado enmiendas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

- No se han presentado enmiendas.

DISPOSICION DEROGATORIA:

- No se han presentado enmiendas.

Fdo.: *José Nieto Noya*

Fdo.: *Jesús Quijano González*

Fdo.: *Jorge V. Póliz Laguna*

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

TITULO PRELIMINAR

DE LA SESION CONSTITUTIVA DE LAS CORTES

Art. 1.

Celebradas las elecciones a las Cortes de Castilla y León previamente convocadas de acuerdo con el artículo 11 del Estatuto de Autonomía, éstas se reunirán en sesión constitutiva el día y hora señaladas en el Decreto de convocatoria dentro de los treinta días siguientes a la fecha de celebración de las elecciones.

Art. 2.

La sesión constitutiva será presidida inicialmente por el Procurador electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.

Art. 3.

1. El Presidente declarará abierta la sesión y por uno de los Secretarios se dará lectura al Decreto de convocatoria, a la relación de Procuradores electos y, en su caso, a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los Procuradores electos que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos.

2. Se procederá seguidamente a la elección de la Mesa de las Cortes de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 33, 34 y 35 de este Reglamento.

Art. 4.

1. Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos. El Presidente electo prestará y solicitará de los demás Procuradores el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía; a tal efecto serán llamados por orden alfabético y se leerá la fórmula siguiente: "¿Juráis o Prometéis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León?". Los Procuradores se acercarán sucesivamente ante la Presidencia para hacer la declaración, contestando "Sí juro" o "Sí prometo". Finalizado el llamamiento, el Presidente declarará constituidas las Cortes de Castilla y León y, seguidamente, levantará la sesión.

2. La constitución de las Cortes será comunicada por su Presidente al Rey, al Senado, al Gobierno y a la Junta, en funciones, de Castilla y León.

TITULO PRIMERO

DEL ESTATUTO DE LOS PROCURADORES

CAPITULO PRIMERO

De la adquisición de la condición de Procurador

Art. 5

1. El Procurador proclamado electo adquirirá la condición plena de Procurador por el cumplimiento conjunto de los siguientes requisitos:

- 1º Presentar, en el Registro General de las Cortes, la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración Electoral.
- 2º Cumplimentar su declaración, a efectos del examen de incompatibilidades, reflejando los datos relativos a profesión y cargos públicos que desempeñe.
- 3º Prestar, en la sesión constitutiva o, si ello no fuere posible, en la primera sesión del Pleno a la que asista, el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

2. Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el Procurador sea proclamado electo. Sin embargo, si transcurren tres sesiones plenarias sin que el Procurador adquiriera la condición de tal conforme a lo dispuesto en el apartado precedente, perderá sus derechos y prerrogativas hasta que dicha adquisición se produzca.

CAPITULO II

De los derechos de los Procuradores

Art. 6.

1. Los Procuradores tendrán derecho a asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y a las sesiones de las Comisiones de las que formen parte. Podrán asistir sin voto a las sesiones de las Comisiones de las que no formen parte, con excepción de aquéllas que tengan carácter secreto, y sustituir a todos los efectos a los Procuradores de su Grupo Parlamentario en cualquier Comisión en los supuestos contemplados en el artículo 39.2.

2. Los Procuradores tendrán derecho a formar parte, al menos, de una Comisión.

3. Los Procuradores tendrán derecho a ejercer cuantas facultades y funciones deriven del ejercicio de su mandato representativo.

Art. 7.

1. Para el mejor cumplimiento de sus tareas parlamentarias, los Procuradores tendrán la facultad de recabar de la Administración Regional los datos o informes que obren en su poder, así como aquellos que obrando en poder de la Administración del Estado o de otras Administraciones tengan relación directa con las competencias de la Comunidad Autónoma.

2. La solicitud se cursará por conducto de la Presidencia de las Cortes y la Administración requerida deberá facilitar en el plazo de un mes la documentación solicitada o manifestar dentro del mismo plazo al Presidente de las Cortes, para su traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan.

3. Los Procuradores también tienen derecho a recibir de las Cortes, directamente o a través de su Grupo Parlamentario, la información o documentación necesaria para el desarrollo de sus tareas. Los servicios generales de las Cortes tienen la obligación de facilitársela.

Art. 8.

1. Los Procuradores, de acuerdo con el art. 11. 5º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, recibirán las dietas que se fijen por el ejercicio de su cargo. 2. Tendrán igualmente derecho a las ayudas e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función.

3. La Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijará cada año la cuantía de las dietas e indemnizaciones dentro de la correspondiente consignación presupuestaria.

CAPITULO III

De las prerrogativas parlamentarias

Art. 9.

Los Procuradores gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.

Art. 10.

Los Procuradores gozarán de inmunidad en los términos del artículo 11. 3º del Estatuto de Autonomía.

Art. 11.

El Presidente de las Cortes, una vez conocida la detención o retención de un Procurador o cualquiera otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de las Cortes y de sus miembros.

CAPITULO IV

De los deberes de los Procuradores

Art. 12.

Los Procuradores tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno de las Cortes y de las Comisiones de que formen parte.

Art. 13.

Los Procuradores están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas.

Art. 14.

Los Procuradores no podrán invocar o hacer uso de su

condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional alguna.

Art. 15.

1. Los Procuradores estarán obligados a efectuar declaración notarial de sus bienes patrimoniales y de aquellas actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos.

2. La mencionada declaración deberá formularse en el plazo de los dos meses siguientes a la fecha en que cada uno haya asumido plenamente la condición de Procurador.

3. Los Procuradores estarán obligados a poner a disposición de la Comisión de Procuradores, siempre que resulte necesario para su trabajo, copia autorizada de aquella declaración.

Art. 16.

1. Los Procuradores deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades establecidas en la Constitución, de acuerdo con el art. 11. 4º del Estatuto de Autonomía y las leyes correspondientes.

2. La Comisión de Procuradores elevará al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompatibilidad de cada Procurador en el plazo de veinte días, contados a partir de la plena asunción por el mismo de la condición de Procurador o de una comunicación que obligatoriamente habrá de realizar de cualquier alteración en la declaración formulada a los efectos de incompatibilidades.

3. Declarada y notificada la incompatibilidad, el Procurador incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño.

CAPITULO V

De la suspensión y pérdida de la condición de Procurador

Art. 17.

El Procurador quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios en los casos en que así proceda, por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el presente Reglamento, cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

Art. 18.

El Procurador perderá su condición de tal por las siguientes causas:

- 1º Por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación del Procurador.
- 2º Por fallecimiento o incapacitación del Procurador, declarada ésta por decisión judicial firme.

3º Por extinción del mandato al transcurrir su plazo o disolverse la Cámara, sin perjuicio de la prórroga en sus funciones de los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente hasta la constitución de las nuevas Cortes.

4º Por renuncia del Procurador, presentada personalmente ante la Mesa de las Cortes.

TITULO II

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Art. 19.

1. Los Procuradores, en número no inferior a cinco, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Procuradores de una formación política que hubiese obtenido un número de escaños no inferior a tres y, al menos, el cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de Castilla y León.

2. En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado los Procuradores que pertenezcan a un mismo grupo político o coalición electoral. Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Procuradores que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan presentado como tales ante el electorado.

Art. 20.

1. La constitución de Grupos Parlamentarios se hará dentro de los siete días siguientes a la sesión constitutiva de las Cortes, mediante escrito dirigido a la Mesa de las mismas.

2. En el mencionado escrito, que irá firmado por todos los que deseen constituir el Grupo, deberá constar la denominación de éste y los nombres de todos los miembros, de su Portavoz, cargos directivos del Grupo y de los Procuradores que, eventualmente, puedan sustituirles.

3. Los Procuradores que no sean miembros de ninguno de los Grupos Parlamentarios constituidos conforme a los apartados anteriores, podrán asociarse a alguno de ellos mediante solicitud que, aceptada por el Portavoz del Grupo al que pretendan asociarse, se dirigirá a la Mesa de las Cortes dentro de los cinco días siguientes al plazo señalado en el apartado 1 del presente artículo.

4. Los asociados se computarán para la determinación de los mínimos que se establecen en el artículo precedente, así como para fijar el número de Procuradores de cada Grupo en las distintas Comisiones.

Art. 21.

Ningún Procurador podrá formar parte de más de un Grupo Parlamentario. Los Procuradores que, conforme a lo establecido en los artículos precedentes, no quedaran integrados en un Grupo Parlamentario en los plazos señalados, quedarán incorporados al Grupo Mixto.

Art. 22.

1. Los Procuradores que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de las Cortes deberán incorporarse a un Grupo Parlamentario dentro de los cinco días siguientes a la adquisición de dicha condición. Para que la incorporación pueda producirse, deberá constar la aceptación del Portavoz del Grupo Parlamentario correspondiente. En caso contrario, quedarán incorporados al Grupo Parlamentario Mixto.

2. El cambio de Grupo Parlamentario conllevará la pérdida del puesto que el Procurador ocupaba en las Comisiones representando al Grupo anterior.

Art. 23.

1. Después de producida la adscripción a un Grupo Parlamentario en el tiempo y la forma que se regula en los artículos anteriores, el Procurador que lo abandone tendrá que encuadrarse necesariamente en el Grupo Mixto.

2. Sin embargo, durante los cinco primeros días de cada sucesivo periodo de sesiones, podrá optar entre permanecer en el Grupo Mixto o asociarse a otro Grupo Parlamentario conforme a lo establecido en el artículo 20. 3.

3. Cuando los componentes de un Grupo Parlamentario distinto del Mixto se reduzcan durante el transcurso de la Legislatura a un número inferior al mínimo exigido para su constitución, el Grupo quedará disuelto y sus miembros pasarán automáticamente a formar parte de dicho Grupo Mixto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior.

Art. 24.

1. Las Cortes pondrán a disposición de los Grupos Parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignarán, con cargo a su presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de Procuradores de cada uno de ellos. Las cuantías se fijarán por la Mesa de las Cortes dentro de los límites de la consignación presupuestaria.

2. Los Grupos Parlamentarios deberán llevar una contabilidad específica de la subvención a que se refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición de la Mesa de las Cortes siempre que ésta lo pida.

Art. 25.

Todos los Grupos Parlamentarios, con las excepciones previstas en el presente Reglamento, gozan de idénticos derechos.

TITULO III

DE LA ORGANIZACION DE LAS CORTES

CAPITULO PRIMERO

De la Mesa

SECCION I. DE LAS FUNCIONES DE LA MESA Y DE SUS MIEMBROS

Art. 26.

1. La Mesa es el órgano rector de las Cortes y ostenta su representación colegiada en los actos a los que asista.

2. La Mesa estará compuesta por el Presidente de las Cortes, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.

3. La Mesa se reunirá por convocatoria del Presidente y se considerará válidamente constituida cuando estén presentes por lo menos tres de sus miembros.

4. El Presidente dirige y coordina la acción de la Mesa.

Art. 27.

1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:

1º Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de las Cortes.

2º Elaborar el proyecto de presupuesto de las Cortes, dirigir y controlar la ejecución del Presupuesto aprobado y presentar a la Cámara, al final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento.

3º Aprobar la plantilla del personal de las Cortes y las normas que regulen el acceso a la misma.

4º Ordenar los gastos de las Cortes, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar.

5º Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos.

6º Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento. Tanto si la resolución fuese tramitarlos en el seno de las propias Cortes, o dirigirlos a otras instituciones, como si se resolviese su archivo, se dará cuenta de la decisión adoptada al peticionario o peticionarios.

7º Programar las líneas generales de actuación de las Cortes, fijar el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones para cada periodo de sesiones y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, todo ello previa audiencia de la Junta de Portavoces.

8º Examinar las peticiones individuales o colectivas que reciban las Cortes y acordar su remisión, por conducto del Presidente, a la autoridad u órganos pertinentes. En todo caso, se acusará recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado.

9º Asignar los escaños en el salón de sesiones a los distintos Grupos Parlamentarios, una vez oída la Junta de Portavoces.

10º Solicitar el parecer de la Junta de Portavoces siempre que lo considere conveniente.

11º Cualesquiera otras que le encomiende el presente

Reglamento y las que no estén atribuidas a un órgano específico.

2. Si un Procurador o un Grupo Parlamentario discrepa de la decisión adoptada por la Mesa en el ejercicio de las funciones a las que se refieren los puntos 5 y 6 del apartado anterior, podrá solicitar su reconsideración. La Mesa decidirá definitivamente, oída la Junta de Portavoces, mediante resolución motivada.

Art. 28.

1. El Presidente de las Cortes ostenta la representación de la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.

2. Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercicio de estas funciones se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

3. El Presidente desempeña asimismo todas las demás funciones que le confieren el Estatuto de Autonomía y el presente Reglamento.

Art. 29.

Los Vicepresidentes, por su orden, sustituyen al Presidente, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad. Desempeñan, además, cualesquiera otras funciones que les encomienden el Presidente o la Mesa.

Art. 30.

Los Secretarios supervisan y autorizan, con el visto bueno del Presidente, las actas de las sesiones plenarias, de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así como las certificaciones que hayan de expedirse; asisten al Presidente en las sesiones para asegurar el orden de los debates y la corrección en las votaciones; colaboran al normal desarrollo de los trabajos de las Cortes según las disposiciones del Presidente; ejercen, además, cualesquiera otras funciones que les encomienden el Presidente o la Mesa.

Art. 31.

1. La Mesa de las Cortes, en función de las necesidades parlamentarias, determinará el grado de dedicación de sus miembros fijando su régimen de retribuciones e incompatibilidades. En todo caso, el Presidente tendrá dedicación exclusiva.

2. Correrá a cargo del Presupuesto de las Cortes de Castilla y León el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a las Mutualidades de los miembros de la Mesa que proceda en función de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 32.

1. La Mesa estará asesorada por un Letrado de la Cámara, quien asistirá a las reuniones, redactará el acta de

las mismas y cuidará, bajo la dirección del Presidente, de la ejecución de los acuerdos.

2. La Mesa adoptará los acuerdos por mayoría de los presentes. Cuando se produzca empate en el momento de tomar decisiones, el Presidente o quien en aquel momento ejerza sus funciones hará uso del voto de calidad. Este criterio será aplicable también a las Mesas de las Comisiones.

SECCION II. DE LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA MESA

Art. 33.

1. El Pleno elegirá a los miembros de la Mesa en la sesión constitutiva de las Cortes.

2. Se procederá a una nueva elección de los miembros de la Mesa, en su caso, cuando la sentencia recaída en los recursos contencioso-electorales supusiera cambio en la titularidad de más del diez por ciento de los escaños. Dicha elección tendrá lugar una vez que los nuevos Procuradores hayan adquirido la plena condición de tales.

3. Las votaciones para la elección de estos cargos se harán por medio de papeletas que los Procuradores entregarán al Presidente de la Mesa de edad para que sean depositadas en la urna preparada para dicha finalidad.

4. Las votaciones para la elección de Presidente, de los Vicepresidentes y de los Secretarios se harán sucesivamente.

5. Antes de la elección, los grupos políticos o coaliciones electorales podrán proponer candidatos para los puestos a cubrir. En ningún caso podrá ser propuesto por cada grupo o coalición más de un candidato para cada una de las votaciones previstas.

6. Concluida cada votación, se procederá al escrutinio. El Presidente de edad leerá en alta voz las papeletas y las entregará a un Secretario para su comprobación.

7. El otro Secretario tomará nota de los resultados de la votación, así como de todos los incidentes que se hubieran producido durante la misma.

Art. 34.

1. Para la elección del Presidente, cada Procurador escribirá un solo nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes. Si nadie hubiera alcanzado dicha mayoría, se repetirá la elección entre los dos Procuradores que mayor número de votos hayan obtenido, y resultará elegido el que obtenga la mayoría simple. En caso de empate, se repetirá la votación, y si el empate persistiera, se considerará elegido el candidato que forme parte del grupo político o coalición electoral que hubiera obtenido un mayor número de votos en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2. Para la elección de los Vicepresidentes, cada Procurador escribirá un nombre en la papeleta y resultarán

elegidos los que por orden correlativo obtengan el mayor número de votos.

3. De la misma forma serán elegidos los dos Secretarios.

4. Si en alguna votación, tanto de Vicepresidentes como de Secretarios, hubiera empate, se estará a lo dispuesto anteriormente para la elección del Presidente.

Art. 35.

En todas estas votaciones serán consideradas nulas las papeletas en blanco, las ilegibles y aquéllas que contengan más de un nombre o el de cualquier Procurador que no hubiese cumplido lo previsto en el primer punto del artículo 5 del presente Reglamento. Sin embargo, dichas papeletas servirán para computar el número de Procuradores que hayan tomado parte en el acto.

Art. 36.

Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la Legislatura serán cubiertas por elección del Pleno en la forma establecida en los artículos anteriores, adaptados en sus previsiones a la realidad de las vacantes que se deban cubrir.

CAPITULO II

De la Junta de Portavoces

Art. 37.

1. Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios constituyen la Junta de Portavoces, que se reunirá bajo la presidencia del Presidente de las Cortes. Este la convocará a iniciativa propia, a petición de dos Grupos Parlamentarios o de un quinto de los miembros de las Cortes. La Junta de Portavoces se reunirá, al menos, mensualmente durante los periodos ordinarios de sesiones.

2. De las convocatorias de la Junta de Portavoces se dará cuenta a la Junta de Castilla y León para que envíe, si lo estima oportuno, un representante, que podrá estar acompañado, en su caso, por persona que lo asista.

3. Deberán asistir a la Junta de Portavoces, al menos, un Vicepresidente, un Secretario de la Cámara y un Letrado de la misma. Los Portavoces o sus suplentes podrán estar acompañados de un miembro de su Grupo, que no tendrá derecho a voto.

4. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio del voto ponderado, según el número de Procuradores con que cuenta cada Grupo Parlamentario en el Pleno.

Art. 38.

Corresponde a la Junta de Portavoces fijar los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas de las Cortes y participar, en la forma prevista en el presente Reglamento, entre otros, en los siguientes asuntos:

1º Fijar el orden del día de los Plenos.

2º Establecer el número de Comisiones Permanentes Legislativas.

3º Fijar el número de miembros de cada Grupo Parlamentario que deberán formar las Comisiones.

4º Asignar los escaños, en el salón de sesiones, a los diferentes Grupos Parlamentarios.

Asimismo, la Junta de Portavoces ejercerá las demás funciones que le atribuye el presente Reglamento.

CAPITULO III

De las Comisiones

SECCION I. NORMAS GENERALES

Art. 39.

1. Las Comisiones, salvo precepto contrario, estarán formadas por los miembros que designen los Grupos Parlamentarios en el número que respecto de cada uno indique la Mesa de las Cortes oída la Junta de Portavoces y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara. Todos los Grupos Parlamentarios tienen derecho a contar como mínimo con un representante en cada Comisión.

2. Los Grupos Parlamentarios pueden sustituir a uno o varios de sus miembros adscritos a una Comisión por otro u otros del mismo Grupo, previa comunicación por escrito al Presidente de las Cortes. Si la sustitución fuera sólo para un determinado asunto, debate o sesión, la comunicación se hará verbalmente o por escrito al Presidente de la Comisión, y, si en ella se indicara que tiene carácter meramente eventual, el Presidente admitirá como miembro de la Comisión indistintamente al sustituto o al sustituido. En todo caso, en las Comisiones de investigación los Grupos Parlamentarios no podrán proceder más que a la sustitución definitiva de sus miembros.

3. Los miembros y Altos Cargos de la Junta de Castilla y León podrán asistir con voz a las Comisiones salvo que las sesiones tengan carácter secreto.

Art. 40.

1. Las Comisiones, con las excepciones previstas en este Reglamento, eligen de entre sus miembros una Mesa, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

2. Antes de la elección los Grupos Parlamentarios podrán proponer candidatos para los puestos a cubrir. En ningún caso podrá ser propuesto más de un candidato para cada una de las elecciones previstas.

3. La elección del Presidente se verificará de acuerdo con lo establecido para la elección del Presidente de las Cortes.

4. Elegido el Presidente, se procederá a la elección del Vicepresidente y Secretario. Para esta elección cada Procu-

rador escribirá en la papeleta un nombre, resultando elegidos Vicepresidente y Secretario aquellos Procuradores que hayan obtenido mayor número de votos correlativamente.

5. En lo no previsto expresamente en este artículo se procederá, con las adaptaciones necesarias, conforme a lo dispuesto para la elección de la Mesa de las Cortes.

Art. 41.

1. Las Comisiones serán convocadas por su Presidente de acuerdo con el de las Cortes, por iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Comisión.

2. El Presidente de las Cortes podrá convocar y presidir cualquier Comisión, aunque sólo tendrá voto en aquéllas de las que forme parte.

3. Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros y entre ellos uno de la Mesa.

Art. 42.

1. Las Comisiones conocerán de los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con su respectiva competencia, la Mesa de las Cortes.

2. Las Comisiones podrán nombrar, de entre sus miembros, una Ponencia formada por uno o varios representantes de los Grupos Parlamentarios para la preparación de los asuntos que les hayan sido encomendados.

3. La Mesa de las Cortes, por su propia iniciativa o a petición de una Comisión interesada, podrá acordar que, sobre una cuestión que sea de la competencia principal de una Comisión, informe previamente otra u otras Comisiones.

4. Las Comisiones deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en el plazo máximo de dos meses, excepto en aquellos casos en que el Reglamento imponga un plazo distinto o la Mesa de las Cortes, atendidas las circunstancias excepcionales que puedan concurrir, acuerde ampliarlo o reducirlo.

5. Las Comisiones no podrán reunirse al mismo tiempo que el Pleno de las Cortes.

Art. 43.

1. Las Comisiones o sus respectivas Mesas, por medio del Presidente de las Cortes, podrán:

- 1º Pedir la información y la documentación que precisen de la Junta de Castilla y León, de los servicios de las propias Cortes y de cualesquiera autoridades de las mismas. Asimismo, podrán solicitar información y documentación de las autoridades del Estado y de otras Administraciones cuando se trate de datos o informes que obrando en su poder tengan relación directa con las competencias de la Comunidad Autónoma. Las autoridades requeridas, en un plazo no superior a los treinta días, facilitarán lo que se les

hubiera solicitado o bien manifestarán al Presidente de las Cortes las razones por las cuales no pueden hacerlo para que lo comunique a la Comisión solicitante.

2º Requerir la presencia ante las Comisiones de los miembros de la Junta de Castilla y León así como de las autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate para que informen acerca de los extremos sobre los que fueran consultados.

3º Solicitar la presencia de otras personas competentes en la materia con la misma finalidad a que se refiere el punto anterior.

2. Si los funcionarios o las autoridades no comparecieran ni justificaran su incomparecencia en el plazo y la forma establecidos por la Comisión o por su Mesa o no respondieran a la petición de la información requerida en el periodo indicado en el apartado anterior, el Presidente de las Cortes lo comunicará a la autoridad o al funcionario superior correspondiente, por si procediera exigirles alguna responsabilidad.

Art. 44.

Los Letrados prestarán, en las Comisiones y respecto de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico-jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas y redactarán sus correspondientes informes y dictámenes recogiendo los acuerdos adoptados.

SECCION II. DE LAS COMISIONES PERMANENTES

Art. 45.

1. Son Comisiones Permanentes Legislativas las siguientes:

- 1ª Estatuto.
- 2ª Presidencia.
- 3ª Gobierno Interior y Administración Territorial.
- 4ª Economía, Hacienda y Comercio.
- 5ª Agricultura, Ganadería y Montes.
- 6ª Educación y Cultura.
- 7ª Bienestar Social.
- 8ª Industria y Energía.
- 9ª Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
- 10ª Transporte, Turismo y Comunicaciones.

2. Son también Comisiones Permanentes aquéllas que deban constituirse por disposición legal y las siguientes:

- 1ª Reglamento.
- 2ª Procuradores.

3. Las Comisiones Permanentes a que se refieren los apartados anteriores deberán constituirse dentro de los veinte días siguientes a la sesión constitutiva de las Cortes.

4. Las Comisiones Permanentes Legislativas establecidas en el apartado 1 de este artículo podrán ser modificadas por decisión de la Mesa, previo acuerdo unánime de la Junta de Portavoces.

Art. 46.

La Comisión de Reglamento estará formada por el Presidente de las Cortes que la presidirá, por los demás miembros de la Mesa que, con el Presidente, constituirán la de la Comisión y por los Procuradores que designen los Grupos Parlamentarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de este Reglamento.

Art. 47.

La Comisión de Procuradores actuará como órgano preparatorio de las resoluciones del Pleno cuando éste, de acuerdo con el Reglamento, deba pronunciarse en asuntos que afecten al Estatuto de los Procuradores, salvo el caso de que la propuesta corresponda al Presidente o a la Mesa de las Cortes. La Comisión elevará al Pleno, debidamente articuladas, las propuestas que en su seno se hubiesen formulado.

Art. 48.

1. El Pleno de las Cortes, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar la creación de otras Comisiones que tengan carácter de permanentes durante la legislatura en que el acuerdo se adopte.

2. El acuerdo de creación fijará el criterio de distribución de competencias entre la Comisión establecida y las que, en su caso, puedan resultar afectadas, así como la composición de la misma.

3. Por el mismo procedimiento señalado en el apartado 1, podrá acordarse la disolución de las Comisiones a las que este artículo se refiere.

SECCION III. DE LAS COMISIONES NO PERMANENTES

Art. 49.

Son Comisiones no Permanentes las que se crean para un trabajo concreto. Se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y en todo caso al concluir la legislatura.

Art. 50.

1. La creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público podrá ser solicitada por la Junta de Castilla y León, por dos Grupos Parlamentarios o por un quinto de los miembros de las Cortes.

2. Admitida la solicitud por la Mesa de las Cortes, se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara. Transcurridos quince días desde la fecha de la publicación

sin que ningún Grupo Parlamentario manifieste su oposición, se entenderá creada la Comisión solicitada, de lo que el Presidente dará cuenta al Pleno de la Cámara.

3. Si algún Grupo Parlamentario manifestase su oposición a la creación de la Comisión, ésta se sustanciará ante el Pleno de la Cámara y no se creará la Comisión si se opone la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

4. La Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, determinará la composición, organización y reglas de funcionamiento de la Comisión. Todos los Grupos Parlamentarios contarán como mínimo con un representante en la Comisión.

5. Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno y requerir la presencia, por medio de la Presidencia de las Cortes, de cualquier persona para que sea oída. Los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle comunicados con una antelación mínima de tres días.

6. Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de las Cortes. El Presidente, oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones.

7. Las conclusiones aprobadas por el Pleno de las Cortes serán publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León y comunicadas a la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de que la Mesa de las Cortes dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones legales oportunas.

8. Los votos particulares rechazados se publicarán también en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León a petición del Grupo Parlamentario proponente.

Art. 51.

La creación de Comisiones no Permanentes distintas de las regladas en el artículo anterior y su eventual carácter mixto o conjunto respecto de otras ya existentes, podrá acordarse por la Mesa de las Cortes, a iniciativa propia, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Procuradores de las Cortes, previa audiencia de la Junta de Portavoces.

CAPITULO IV

Del Pleno

Art. 52.

El Pleno de las Cortes será convocado por su Presidente por propia iniciativa, o a solicitud, al menos, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Procuradores de las Cortes.

Art. 53.

1. Los Procuradores tomarán asiento en el salón de sesiones conforme a su adscripción a Grupos Parlamentarios y ocuparán siempre el mismo escaño.

2. Habrá en el salón de sesiones un banco especial destinado a los miembros de la Junta de Castilla y León.

3. Sólo tendrán acceso al salón de sesiones, además de las personas indicadas, los funcionarios de las Cortes en el ejercicio de su cargo y quienes estén, expresamente, autorizados por el Presidente.

Art. 54.

El Presidente podrá, a título excepcional, con el parecer favorable de la Mesa y Junta de Portavoces, invitar a personalidades nacionales o extranjeras a que hagan uso de la palabra dirigiéndose al Pleno de la Cámara.

CAPITULO V

De la Diputación Permanente

Art. 55.

1. La Diputación Permanente estará formada por el Presidente de las Cortes que la presidirá, por los demás miembros de la Mesa que, con el Presidente, constituirán la de la Diputación y por los Procuradores que designen los Grupos Parlamentarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de este Reglamento.

2. Cada Grupo Parlamentario designará el número de Procuradores que le corresponda y otros tantos en concepto de suplentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Ningún Procurador que sea miembro de la Junta de Castilla y León podrá serlo de la Diputación Permanente.

4. La Diputación Permanente será convocada por el Presidente a iniciativa propia, a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de aquella, o a petición de la Junta de Castilla y León.

Art. 56.

1. Corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Cámara:

- a) Desde la terminación del mandato parlamentario y desde la disolución de las Cortes hasta que se constituyan las nuevas.
- b) En los períodos de vacaciones parlamentarias, cuando las Cortes no estén reunidas.

2. En los casos de disolución o expiración del mandato parlamentario, la Diputación Permanente:

- a) Ejercerá, cuando corresponda, el control de la legislación delegada.
- b) Podrá autorizar créditos extraordinarios y suplementos de crédito, a petición de la Junta de Castilla

y León, por razón de urgencia y de necesidad justificada, siempre que así lo acordase la mayoría absoluta de sus miembros.

- c) Podrá acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad o el planteamiento por la Junta de Castilla y León de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, en supuestos de urgencia, siempre que se pronuncien en tal sentido la mayoría absoluta de sus miembros.

3. En período de vacaciones parlamentarias podrá solicitar la convocatoria de las Cortes, y el Presidente las convocará, si así lo acuerda la mayoría absoluta de sus miembros.

4. La Diputación Permanente desempeñará cualquier otra función que le encomienden este Reglamento y las leyes.

Art. 57.

Será aplicable a las sesiones de la Diputación Permanente y a su funcionamiento lo establecido para el Pleno en el presente Reglamento.

Art. 58.

En todos los supuestos en los que la Diputación Permanente asuma las funciones reguladas en el artículo 56, y necesariamente después de la celebración de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, dará cuenta al Pleno de las Cortes, en la primera sesión ordinaria, de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas.

CAPITULO VI

De los servicios de las Cortes

SECCION I. DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

Art. 59.

1. Las Cortes de Castilla y León dispondrán de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, especialmente de servicios técnicos, de documentación y asesoramiento.

2. La Mesa de las Cortes establecerá los puestos de trabajo y las funciones correspondientes a cada uno de ellos.

Art. 60.

Las Cortes dispondrán de un servicio de Biblioteca con la correspondiente consignación presupuestaria anual.

Art. 61.

1. El Secretario General - Letrado Mayor, bajo la dirección del Presidente y de la Mesa, es el jefe superior de todo el personal y de todos los servicios de las Cortes, y cumple sus funciones técnicas de apoyo y asesoramiento de los órganos rectores de las mismas asistido por los demás Letrados de las Cortes.

2. El Secretario General - Letrado Mayor será nombrado por la Mesa de las Cortes a propuesta del Presidente entre los Letrados de aquéllas.

SECCION II. DE LAS PUBLICACIONES DE LAS CORTES Y DE LA PUBLICIDAD DE SUS TRABAJOS

Art. 62.

Las publicaciones oficiales de las Cortes de Castilla y León son las siguientes:

1º El Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León.

2º El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Art. 63.

1. En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno y de la Diputación Permanente. De la misma forma se reproducirá el contenido de las sesiones de las Comisiones, cuando ejerzan funciones legislativas o comparezcan ante ellas los miembros de la Junta de Castilla y León.

El Diario de Sesiones será enviado a los Procuradores, quienes en el plazo de quince días deberán hacer llegar, si las hubiese, sus objeciones al texto. Si el procurador lo solicitase expresamente, el Presidente de las Cortes, comprobada la existencia de error en el texto, dispondrá la publicación de las rectificaciones en el inmediato Diario de Sesiones, dando cuenta periódicamente a la Mesa de las correcciones publicadas.

2. De las sesiones secretas se levantará acta literal, cuyo único ejemplar se custodiará en la Presidencia. Este ejemplar podrá ser consultado por los Procuradores, previo acuerdo de la Mesa de las Cortes. Los acuerdos adoptados se publicarán en el Diario de Sesiones, salvo que la Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, decida declararlos reservados, y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 50 de este Reglamento.

Art. 64.

1. El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León publicará los proyectos y las proposiciones de ley, los votos particulares o las enmiendas que se hayan de defender en el Pleno o en las Comisiones, los informes de ponencia, los dictámenes de las Comisiones, las interpelaciones, las mociones, las proposiciones no de ley, las propuestas de resolución, las preguntas y sus respuestas escritas, las comunicaciones de la Junta de Castilla y León y cualquier otro texto o documento cuya publicación sea exigida por algún precepto de este Reglamento o lo ordene el Presidente, atendiendo a la exigencia de un trámite que requiera la intervención de las Cortes de Castilla y León. También publicará, a juicio de la Presidencia, las disposiciones de las Cortes Generales del Estado que puedan afectar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. La Presidencia de las Cortes podrá ordenar, a efectos de su debate y votación y sin perjuicio de su debida constancia ulterior en el Boletín Oficial de las Cortes, que los documentos a que se refiere el apartado anterior sean objeto de reproducción por otro medio mecánico y de reparto a los Procuradores miembros del órgano que haya de debatirlos.

Art. 65.

1. La Mesa de las Cortes adoptará las medidas adecuadas, en cada caso, para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los distintos órganos de las Cortes.

2. La propia Mesa regulará la concesión de credenciales a los representantes de los distintos medios de comunicación social, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destinan y a las sesiones a que puedan asistir.

3. Nadie podrá, sin estar expresamente autorizado por el Presidente de las Cortes, realizar grabaciones gráficas o sonoras de las sesiones de los órganos de las Cortes.

4. La Mesa de las Cortes garantizará la custodia y la debida utilización de los materiales en que consten las intervenciones habidas en el Pleno, en las Comisiones o en la Diputación Permanente.

TITULO IV

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CAPITULO PRIMERO

De las sesiones

Art. 66.

1. Las Cortes de Castilla y León se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los periodos ordinarios de sesiones comprenderán ciento veinte días al año y se celebrarán entre septiembre y diciembre el primero y entre febrero y junio el segundo.

2. Fuera de dichos periodos las Cortes sólo podrán celebrar sesiones extraordinarias a petición de la Junta, de la Diputación Permanente o de una quinta parte de los Procuradores. En la petición deberá figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria solicitada.

3. La Presidencia convocará la sesión extraordinaria si se le pide por quien establece el párrafo anterior, y de acuerdo con el orden del día que le haya sido propuesto. En todo caso, las Cortes permanecerán reunidas hasta el momento en que se haya concluido el orden del día para el que fueron convocadas.

4. La celebración de las sesiones extraordinarias, tanto de las Comisiones como del Pleno, se hará de acuerdo con lo establecido en este Reglamento para las respectivas sesiones ordinarias.

Art. 67.

1. Las sesiones, por regla general, se celebrarán en días de la semana comprendidos entre el martes y el viernes, ambos inclusive.

2. Podrán, no obstante, celebrarse en días diferentes de los señalados en los siguientes casos:

1º Por acuerdo tomado en Pleno o en Comisión, a iniciativa de sus respectivos Presidentes, de un Grupo Parlamentario, o de una quinta parte de los Procuradores miembros de las Cortes o de la Comisión.

2º Por acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León previa conformidad de la Junta de Portavoces.

Art. 68.

Las sesiones del Pleno serán públicas, con las siguientes excepciones:

1º Cuando se traten de cuestiones concernientes al decoro de las Cortes o de sus miembros, o a la separación de un Procurador.

2º Cuando se debatan propuestas, dictámenes, informes o conclusiones elaboradas en el seno de la Comisión de Procuradores o formuladas por una Comisión de Investigación.

3º Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa de la Mesa de las Cortes, de la Junta de Castilla y León, de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los miembros de las Cortes. Planteada la solicitud de sesión secreta, se someterá a votación sin debate y la sesión continuará con el carácter que se hubiera acordado.

Art. 69.

1. Las sesiones de las Comisiones no serán públicas; no obstante, podrán asistir los representantes de los medios de comunicación social debidamente acreditados, excepto cuando aquéllas tengan carácter secreto.

2. Las sesiones de las Comisiones serán secretas cuando se acuerde por mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa de su respectiva Mesa, de la Junta de Castilla y León, de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de sus componentes.

3. Serán secretas en todo caso las sesiones y los trabajos de la Comisión de Procuradores y de las Comisiones de Investigación.

Art. 70.

1. De las sesiones del Pleno y de las Comisiones se levantará acta, que contendrá una relación sucinta de las materias debatidas, personas intervinientes, incidencias producidas y acuerdos adoptados.

2. Las actas, supervisadas y autorizadas por los Secretarios con el visto bueno del Presidente, quedarán a disposición de los Procuradores en la Secretaría General de las

Cortes. En el caso de que no se produzca reclamación sobre su contenido antes del comienzo de la siguiente sesión, se entenderán aprobadas. En caso contrario, se someterán a la decisión del órgano correspondiente en su siguiente sesión.

CAPITULO II

Del orden del día

Art. 71.

1. El Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces y teniendo en cuenta el calendario de actividades, fijará el orden del día del Pleno, que se incluirá en la correspondiente convocatoria

En el orden del día de todos los Plenos el primer punto se reservará para informaciones de actualidad de la Junta de Castilla y León y preguntas orales, dando prioridad a las que sean de actualidad.

2. El orden del día de las Comisiones será fijado por su Presidente, de acuerdo con el Presidente de las Cortes, considerando el calendario fijado por la Mesa de las Cortes y dando inmediata cuenta del mismo a los demás miembros de la Mesa de la Comisión.

3. La Junta de Castilla y León podrá pedir que en una sesión concreta se incluya un asunto en el orden del día con carácter prioritario, y la petición será atendida siempre que se hayan cumplido los trámites precisos para la inclusión del asunto de que se trate.

4. A iniciativa de un Grupo Parlamentario o de la Junta de Castilla y León, la Junta de Portavoces podrá acordar, por razones de urgencia y por unanimidad, la inclusión en el orden del día de un determinado asunto aunque no se hubieren cumplido todavía los trámites reglamentarios.

5. Las sesiones plenarias no podrán ser levantadas antes de que el orden del día haya sido debatido en su totalidad, sin perjuicio de las alteraciones previstas en el presente Reglamento.

Art. 72.

1. El orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de éste a propuesta del Presidente o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de las Cortes.

2. El orden del día de una Comisión puede ser alterado por acuerdo de ésta a propuesta de su Presidente o a petición de un Grupo Parlamentario o de una quinta parte de los Procuradores miembros de la misma.

3. En uno y otro caso, cuando se trate de incluir un asunto, tendrán que haberse cumplido los trámites reglamentarios que le permitan estar en condiciones de ser incluido.

CAPITULO III

De los debates

Art. 73.

Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribu-

ción, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servirle de base, salvo acuerdo en contrario de la Mesa de las Cortes o de la Comisión, que será debidamente justificado ante el órgano correspondiente.

Art. 74.

1. Ningún Procurador podrá hablar sin haber pedido y obtenido del Presidente la palabra. Si un Procurador al ser llamado por la Presidencia no se encuentra presente, se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.

2. Los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz. El orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna o desde el escaño.

3. Nadie podrá ser interrumpido sino por el Presidente, para advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o para hacer llamada al orden a la Cámara, a alguno de sus miembros o al público.

4. Los Procuradores que hubiesen pedido la palabra en un mismo sentido podrán cederse el turno entre sí. Previa comunicación al Presidente y para un caso concreto, cualquier Procurador con derecho a intervenir podrá ser sustituido por otro del mismo Grupo Parlamentario.

5. Los miembros de la Junta de Castilla y León podrán hacer uso de la palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio de las facultades que para la ordenación de los debates corresponden al Presidente de las Cortes o de la Comisión, los cuales procurarán que los Procuradores intervinientes utilicen un tiempo proporcional al empleado por los miembros de la Junta de Castilla y León.

6. Transcurrido el tiempo establecido, el Presidente, tras indicar por dos veces al orador que concluya, le retirará la palabra.

Art. 75.

1. Cuando, en el desarrollo de los debates se hicieran alusiones que indiquen juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un Procurador, y éste solicitara intervenir, el Presidente, si estimara que las alusiones han existido, podrá concederle el uso de la palabra por tiempo no superior a tres minutos, para que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas. Si el Procurador excediera estos límites, el Presidente le retirará inmediatamente la palabra.

2. No se podrá contestar a las alusiones sino en la misma sesión. Si el Procurador aludido no estuviera presente, podrá contestar a la alusión en la sesión siguiente.

3. Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un Grupo Parlamentario, el Presidente podrá conceder a un representante de aquél el uso de la palabra por el mismo tiempo y con las condiciones que se establecen en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Art. 76.

1. En cualquier momento del debate, un Procurador podrá pedir la observancia del Reglamento. A este efecto, deberá citar el artículo o artículos cuya aplicación reclame. No habrá por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alegación.

2. Cualquier Procurador podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que crea convenientes a la ilustración de la materia de la que se trate. La Presidencia podrá denegar la lectura que considere no pertinente o innecesaria.

3. Un Grupo Parlamentario podrá pedir quorum antes de comenzar una votación.

Art. 77.

1. En todo debate, el que fuera contradicho en sus argumentaciones por otro u otros de los intervinientes, tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de cinco minutos.

2. Lo establecido en el presente Reglamento para cualquier debate, se entiende sin perjuicio de las facultades del Presidente para ordenar el debate y las votaciones de acuerdo con la Junta de Portavoces y, valorando su importancia, ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios o de los Procuradores, así como acumular, con ponderación de las circunstancias de grupos y materias, todas las que en un determinado asunto puedan corresponder a un Grupo Parlamentario.

Art. 78.

1. Si no hubiera precepto específico, y sin perjuicio de las resoluciones que pueda tomar el Presidente en la dirección de los debates, se entenderá que en todo debate cabe un turno a favor y otro en contra. La duración de las intervenciones en una discusión sobre cualquier asunto o cuestión, salvo precepto de este Reglamento en contrario, no excederá de diez minutos.

2. Si el debate fuera de los calificados de totalidad, los turnos serán de quince minutos y, tras ellos, los demás Grupos Parlamentarios podrán fijar su posición en intervenciones que no excedan de diez minutos.

Art. 79.

1. Con carácter general, todos los turnos de intervención de los Grupos Parlamentarios serán iniciados por el Grupo Parlamentario Mixto. A continuación intervendrán los restantes Grupos Parlamentarios en orden inverso a su importancia numérica.

2. Los miembros del Grupo Mixto distribuirán entre ellos el tiempo total de intervención, que en su conjunto no podrá exceder del que corresponda a cada uno de los demás Grupos. La Presidencia de la Cámara deberá ser informada del acuerdo antes de cada sesión. En caso contrario, resolverá sobre la distribución entre ellos del tiempo a emplear por los miembros del Grupo.

Art. 80.

Cuando el Presidente, los Vicepresidentes o los Secretarios de las Cortes o de la Comisión deseen tomar parte en el debate, abandonarán su lugar en la Mesa y no volverán a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema de que se trate.

CAPITULO IV

De las votaciones

Art. 81.

1. Para adoptar acuerdos, las Cortes y sus órganos deberán estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

2. Si, llegado el momento de la votación, resultase que no existe el quorum a que se refiere el apartado anterior, se pospondrá la votación por el plazo máximo de dos horas. Si, transcurrido este plazo, tampoco pudiera celebrarse válidamente aquélla, el asunto será sometido a decisión del órgano correspondiente en la siguiente sesión.

Art. 82.

1. Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido aprobados por mayoría simple, sin perjuicio de las mayorías especiales que establecen el Estatuto de Castilla y León, las demás Leyes y este Reglamento.

2. El voto de los Procuradores es personal e indelegable. Ninguno podrá tomar parte en las votaciones sobre las resoluciones que le afecten singular y directamente.

Art. 83.

Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún Procurador podrá entrar en el salón o abandonarlo salvo caso de fuerza mayor y con la venia de la Presidencia.

Art. 84.

En los casos establecidos en el presente Reglamento o en aquellos en que por su singularidad o importancia la Presidencia así lo acuerde, la votación se realizará a hora fija, anunciada previamente por aquélla. Si, llegada la hora fijada, el debate no hubiera finalizado, la Presidencia señalará nueva hora para la votación.

Art. 85.

Los acuerdos podrán ser adoptados por asentimiento o por votación. La votación podrá ser:

1º Ordinaria.

2º Pública.

3º Secreta.

Art. 86.

Se adoptarán por asentimiento los acuerdos que, sometidos por el Presidente a su aprobación por este procedi-

miento, no susciten ninguna objeción ni oposición. En otro caso, se hará votación ordinaria.

Art. 87.

La votación ordinaria podrá realizarse, por decisión de la Presidencia, en una de las siguientes formas: 1º Levantándose primero quienes aprueben, seguidamente los que desapruében, y finalmente los que se abstengan. El Presidente ordenará el recuento por los Secretarios si tuviese duda del resultado o si, incluso después de anunciado éste, algún Grupo Parlamentario lo reclamare. 2º Por procedimiento electrónico que acredite el sentido del voto de cada Procurador y los resultados totales de la votación.

Art. 88.

1. La votación será pública por llamamiento o secreta cuando así lo exija este Reglamento o lo soliciten dos Grupos Parlamentarios o una quinta parte de los Procuradores o de los miembros de la Comisión. Si hubiere solicitudes concurrentes en sentido contrario, prevalecerá la de votación secreta.

2. En todo caso las votaciones para la investidura del Presidente de la Junta y la moción de censura serán públicas por llamamiento, y las votaciones relativas a personas serán secretas. Cuando se trate de procedimientos legislativos las votaciones no podrán ser secretas.

Art. 89.

En la votación pública por llamamiento uno de los Secretarios nombrará a los Procuradores y éstos responderán "Sí", "No", o "Abstención". El llamamiento se realizará por orden alfabético del primer apellido, comenzando por el Procurador cuyo nombre sea sacado a suerte. Los miembros de la Junta de Castilla y León que sean Procuradores y la Mesa de las Cortes votarán al final.

Art. 90.

1. La votación secreta podrá hacerse:

1º. Por papeletas, cuando se trate de elección de personas, cuando lo decida la Presidencia o cuando se hubiera especificado esta modalidad en la solicitud de voto secreto.

2º Por procedimiento electrónico que acredite el resultado total de la votación, omitiendo la identificación de los votantes.

2. Para realizar las votaciones a que se refiere el punto 1º del apartado anterior, los Procuradores serán llamados nominalmente a la Mesa para depositar la papeleta en la urna correspondiente.

Art. 91.

1. Cuando se produjera empate en alguna votación, se repetirá ésta, y, si persistiera aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable el Presidente. Transcurrido el plazo y habiendo permitido la entrada y la salida de los Procuradores en el salón de sesiones, se repetirá la votación, y, si de nuevo se produjese empate, el

dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate se considerará rechazado.

2. En las votaciones de una Comisión, se entenderá que no existe empate cuando, siendo idéntico el sentido en el que hubieran votado todos los miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo Grupo Parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el número de votos con que cada Grupo esté representado en el Pleno.

3. No obstante, en las mociones y proposiciones no de ley en Comisión, el empate mantenido tras las votaciones reguladas en el apartado 1 será dirimido sometiendo la cuestión a la decisión del Pleno.

4. En cualquier caso, el empate producido en Comisión en el procedimiento legislativo ordinario no impedirá que el texto del dictamen sea elevado al Pleno recogiendo los términos del Proyecto debatido en Comisión.

Art. 92.

1. Verificada una votación, o el conjunto de votaciones sobre una misma cuestión, cada Grupo Parlamentario podrá explicar el voto por tiempo máximo de cinco minutos.

2. En los proyectos y proposiciones de ley, sólo podrá explicarse el voto después de la última votación, salvo que se hubieran dividido en partes claramente diferenciadas a efectos del debate, en cuyo caso cabrá la explicación después de la última votación correspondiente a cada parte. En los casos previstos en este apartado, la Presidencia podrá ampliar el tiempo hasta diez minutos.

3. Sólo podrán explicar su voto los Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido en un debate. No obstante, el Grupo Parlamentario que, como consecuencia del debate, hubiera votado de forma diferente a la anunciada en su intervención, tendrá derecho a explicar el voto emitido.

4. No procederá la explicación del voto cuando la votación haya sido secreta.

CAPITULO V

Del cómputo de los plazos y de la presentación de documentos

Art. 93.

1. Los plazos señalados por días en este Reglamento se computan en días hábiles, y los señalados por meses, de fecha a fecha en la forma en que determina la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Se excluirán del cómputo los periodos en que las Cortes no celebren sesiones, salvo que el asunto en cuestión estuviese incluido en el orden del día de una sesión extraordinaria. La Mesa de las Cortes fijará los días que han de habilitarse a los solos efectos de cumplimentar los trámites que posibiliten la celebración de aquélla.

Art. 94.

1. La Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar la prórroga o reducción de los plazos establecidos en este Reglamento.

2. Salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad.

Art. 95.

1. La presentación de documentos en el registro general de las Cortes podrá hacerse en los días y horas que fije la Mesa de las Cortes.

2. Serán admitidos los documentos presentados dentro del plazo en las oficinas de Correos, siempre que concurren los requisitos exigidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

CAPITULO VI

De la declaración de urgencia

Art. 96.

1. A petición de la Junta de Castilla y León, de un Grupo Parlamentario o de una quinta parte de los Procuradores, la Mesa de las Cortes, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, podrá acordar que un asunto se tramite por el procedimiento de urgencia.

2. Si el acuerdo se tomara hallándose un trámite en curso, el procedimiento de urgencia se aplicará para los trámites siguientes a aquél.

Art. 97.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 94 de este Reglamento, en el procedimiento de urgencia los plazos tendrán una duración de la mitad de los establecidos con carácter ordinario.

CAPITULO VII

De la disciplina parlamentaria

SECCION I. DE LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS PROCURADORES

Art. 98.

1. El Procurador sólo podrá ser privado de alguno o de todos los derechos que le conceden los artículos 6 al 8 del presente Reglamento, por acuerdo de la Mesa y previa propuesta motivada de la Comisión de Procuradores, en los siguientes supuestos:

- 1º Cuando de forma reiterada o notoria y sin justificación dejara de asistir, voluntariamente, a las sesiones del Pleno o de las Comisiones.
- 2º Cuando quebrante el deber de secreto establecido en el artículo 13 de este Reglamento.
- 3º Cuando de palabra u obra infringiera ofensas graves a las Cortes o a sus miembros dentro o fuera del recinto parlamentario.

2. El acuerdo de la Mesa, que será motivado, señalará la extensión y la duración de las sanciones.

Art. 99.

La expulsión inmediata de un Procurador y la prohibición de asistir al resto de la sesión y, en su caso, a la siguiente, podrán ser impuestas por el Presidente en los términos establecidos en los artículos 103 y 105 del presente Reglamento.

Art. 100.

1: La exclusión temporal de las Cortes sólo podrá acordarse por el Pleno, por razón de disciplina parlamentaria, en los siguientes supuestos:

- 1º Cuando, impuesta y cumplida la sanción prevista en el artículo 98, el Procurador persistiera en su actitud.
- 2º Cuando el Procurador portara armas dentro del recinto parlamentario.
- 3º Cuando el Procurador, tras haber sido expulsado del salón de sesiones, se negara a abandonarlo.
- 4º Cuando el Procurador contraviniera lo dispuesto en el artículo 14 de este Reglamento.

2. Las propuestas formuladas por la Mesa de las Cortes en los tres primeros supuestos del apartado anterior, y por la Comisión de Procuradores en el 4º, se someterán a la consideración y decisión del Pleno de las Cortes en sesión secreta. En el debate los Grupos Parlamentarios podrán intervenir por medio de sus Portavoces, y el Pleno resolverá sin más trámites.

3. Si la causa de la sanción pudiera ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia dará cuenta al órgano judicial competente.

SECCION II. DE LAS LLAMADAS A LA CUESTION Y AL ORDEN

Art. 101.

1. Los oradores serán llamados a la cuestión siempre que estuvieran fuera de ella, bien por digresiones extrañas al punto de que se trate, bien por volver sobre lo que ya estuviera discutido o votado.

2. El Presidente retirará la palabra al orador al que hubiera de hacer una tercera llamada a la cuestión en una misma intervención.

Art. 102.

Los Procuradores y los oradores serán llamados al orden:

- 1º Cuando profirieran palabras o vertieran conceptos ofensivos al decoro de las Cortes, de sus miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad.
- 2º Cuando en sus intervenciones faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones.

3º Cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alterasen el orden de las sesiones.

4º Cuando, retirada la palabra a un orador, pretendiera continuar haciendo uso de ella.

Art. 103.

1. Al Procurador u orador que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra, y el Presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión.

2. Si el Procurador sancionado no atendiera el requerimiento de abandonar el salón de sesiones, el Presidente adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión. En este caso, la Presidencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, podrá imponerle además la prohibición de asistir a la siguiente sesión.

3. Cuando se produjera el supuesto señalado en el punto primero del artículo anterior, el Presidente requerirá al Procurador u orador para que retire las ofensas proferidas y ordenará que no consten en el Diario de Sesiones. La negativa a este requerimiento podrá dar lugar a sucesivas llamadas al orden, con los efectos señalados en los apartados anteriores de este artículo.

SECCION III. DEL ORDEN DENTRO DEL RECINTO DE LAS CORTES

Art. 104.

El Presidente velará por el mantenimiento del orden dentro de todas las dependencias de las Cortes. A este efecto podrá tomar todas las medidas que considere pertinentes, incluida la de poner a disposición judicial a las personas que perturben aquél.

Art. 105.

Cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella, y fuese o no Procurador, promoviera desorden grave con su conducta de obra o palabra, será inmediatamente expulsada. Si se tratase de un Procurador, el Presidente podrá suspenderle, además, en su condición de Procurador por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 100, pueda ampliar o agravar la sanción.

Art. 106.

1. El Presidente velará en las sesiones públicas por el mantenimiento del orden en las tribunas.

2. Quienes en éstas dieran muestras de aprobación o desaprobación, perturbaran el orden o faltaran a la debida compostura, serán inmediatamente expulsados de las dependencias de las Cortes por indicación del Presidente, quien ordenará, cuando lo estime conveniente, que los servicios de seguridad de las Cortes levanten las oportunas

diligencias por si los actos producidos pudieran ser constitutivos de delito o falta.

TITULO V

DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

CAPITULO PRIMERO

De la iniciativa legislativa

Art. 107.

La iniciativa legislativa ante las Cortes de Castilla y León corresponde:

- 1º A la Junta de Castilla y León.
- 2º A los Procuradores, en los términos que establece este Reglamento.

CAPITULO II

Del procedimiento legislativo común

SECCION I. DE LOS PROYECTOS DE LEY

I. Presentación de Enmiendas.

Art. 108.

1. Los proyectos de ley remitidos por la Junta de Castilla y León deberán ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.

2. La Mesa de las Cortes ordenará que se publiquen, que se abra el plazo de presentación de enmiendas y que se tramiten en la Comisión correspondiente.

Art. 109.

1. Publicado un proyecto de ley, los Procuradores y los Grupos Parlamentarios tendrán un plazo de veinte días para presentar enmiendas al mismo, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión. El escrito de enmiendas deberá llevar la firma del Portavoz del Grupo a que pertenezca el Procurador o de la persona que sustituya a aquél, a los meros efectos de conocimiento. La omisión de este trámite podrá subsanarse antes del comienzo de la discusión en Comisión.

2. Las enmiendas podrán ser a la totalidad o al articulado.

3. Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley y propongan bien la devolución de aquél a la Junta de Castilla y León o bien un texto completo alternativo al del proyecto. Estas enmiendas sólo podrán ser presentadas por los Grupos Parlamentarios.

4. Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, sustitución, modificación o adición. En los tres últimos

supuestos la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga.

5. A tal fin y, en general, a todos los efectos del procedimiento legislativo, cada disposición adicional, final, derogatoria o transitoria tendrá la consideración de un artículo, al igual que el título de la ley, las rúbricas de las distintas partes en que esté sistematizada, la propia ordenación sistemática y la exposición de motivos.

Art. 110.

1. Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas a un proyecto de ley, será competencia de la Mesa de la Comisión la calificación de las enmiendas presentadas.

2. Si el Procurador o Grupo Parlamentario enmendante discrepare de la decisión adoptada por la Mesa de la Comisión podrá, en el plazo de tres días, solicitar su reconsideración a la Mesa de la Cámara, que resolverá de forma definitiva, oída la Junta de Portavoces, mediante resolución motivada.

Art. 111.

1. Las enmiendas a un proyecto de ley que supongan un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio requerirán la conformidad de la Junta de Castilla y León para su tramitación.

2. A tal efecto, la Mesa de la Comisión remitirá a la Junta de Castilla y León, por conducto del Presidente de las Cortes, las que a su juicio puedan estar incluidas en lo previsto en el apartado anterior.

3. La Junta de Castilla y León deberá dar respuesta razonada en el plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderá que el silencio de la Junta expresa conformidad.

4. La Junta de Castilla y León podrá manifestar su disconformidad con la tramitación de enmiendas que supongan aumentos de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios en cualquier momento de la tramitación, de no haber sido consultada en la forma que señalan los apartados anteriores.

II. Debate de totalidad en el Pleno.

Art. 112.

1. El debate de totalidad de los proyectos de ley en el Pleno procederá cuando se hubieren presentado, dentro del plazo reglamentario, enmiendas a la totalidad. El Presidente de la Comisión, en este caso, trasladará al Presidente de las Cortes las enmiendas a la totalidad que se hubieren presentado para su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria en la que hayan de debatirse.

2. El debate de totalidad se desarrollará con sujeción a lo establecido en este Reglamento para los de este carácter, si bien cada una de las enmiendas presentadas podrá dar lugar a un turno a favor y otro en contra y al de fijación de posiciones.

3. Terminada la deliberación, el Presidente someterá a votación las enmiendas a la totalidad defendidas, comenzando por aquéllas que propongan la devolución del proyecto a la Junta de Castilla y León.

4. Si el Pleno acordase la devolución del Proyecto, éste quedará rechazado y el Presidente de las Cortes de Castilla y León lo comunicará al de la Junta. En caso contrario, se remitirá a la Comisión para proseguir su tramitación.

5. Si el Pleno aprobase una enmienda a la totalidad de las que propongan un texto alternativo, se dará traslado del mismo a la Comisión correspondiente, publicándose en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León y procediéndose a abrir un nuevo plazo de presentación de enmiendas, que sólo podrán formularse sobre el articulado.

III. Deliberación en la Comisión.

Art. 113.

1. Finalizado el debate de totalidad, si lo hubiere, o, en todo caso, el plazo de presentación de enmiendas, se nombrará una Ponencia de entre los miembros de la Comisión, con el número y distribución que señale la Mesa de la misma teniendo siempre representación todos los Grupos Parlamentarios.

2. Los miembros de la Ponencia serán nombrados por la Comisión, pudiendo ser designados por los Portavoces de los Grupos Parlamentarios a petición del Presidente de la Comisión. La Comisión, en la primera sesión que celebre para el debate del informe de la Ponencia, y antes de entrar en el examen del mismo, ratificará la designación de los Ponentes efectuada por los Grupos Parlamentarios.

3. La Ponencia, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas al articulado redactará un informe en el plazo de quince días.

4. La Ponencia, por unanimidad, podrá incorporar nuevas enmiendas en su Informe.

5. La Mesa de la Comisión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 42 del presente Reglamento, podrá prorrogar el plazo para la emisión del informe, cuando la transcendencia o complejidad del proyecto de ley así lo exigiere.

Art. 114.

1. Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se hará artículo por artículo. En cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los enmendantes al artículo y los miembros de la Comisión.

2. Las enmiendas que se hubieren presentado en relación con la exposición de motivos se discutirán al final del articulado, si la Comisión acordare incorporar dicha exposición de motivos como preámbulo de la Ley.

3. Durante la discusión de un artículo, la Mesa podrá admitir a trámite enmiendas transaccionales que se presenten en este momento por escrito por un miembro de la

Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. También se admitirán a trámite enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.

4. Durante el debate la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten por escrito con el acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios.

Art. 115.

1. En la dirección de los debates de la Comisión, la Presidencia de la Comisión y la Mesa ejercerán respectivamente las funciones que en este Reglamento se confieren a la Presidencia y a la Mesa de las Cortes.

2. El Presidente de la Comisión, de acuerdo con la Mesa de ésta, podrá establecer el tiempo máximo de la discusión para cada artículo, el que corresponda a cada intervención, a la vista del número de peticiones de palabra, y el total para la conclusión del dictamen.

Art. 116.

El dictamen de la Comisión, firmado por su Presidente y por el Secretario, se remitirá al Presidente de las Cortes a los efectos de la tramitación subsiguiente que proceda.

IV. Deliberación en el Pleno.

Art. 117.

Los Grupos Parlamentarios y los Procuradores, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de terminación del dictamen por el Pleno de la Comisión, en escrito dirigido al Presidente de las Cortes deberán comunicar los votos particulares y enmiendas que, después de haber sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al dictamen, se pretendan defender en el Pleno.

Art. 118.

1. El debate en el Pleno podrá comenzar con la presentación que de la iniciativa de la Junta de Castilla y León haga uno de sus miembros y de la que del dictamen haga un Procurador de la Comisión, cuando así lo hubiere acordado ésta. Estas intervenciones no podrán exceder de quince minutos.

2. El Presidente de las Cortes, oídas la Mesa y la Junta de Portavoces, podrá:

1º Ordenar los debates y las votaciones por artículos, o bien por materias, grupos de artículos, o de enmiendas, cuando lo aconseje la complejidad del texto, la homogeneidad o interconexión de las pretensiones de las enmiendas o la mayor claridad en la confrontación política de las posiciones.

2º Fijar de antemano el tiempo máximo de debate de un proyecto, distribuyéndolo, en consecuencia, entre las intervenciones previstas y procediéndose, una vez agotado, a las votaciones que quedaren pendientes.

3. Durante el debate, la Presidencia podrá admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas y gramaticales. Sólo podrán admitirse a trámite enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el texto del dictamen cuando ningún Grupo Parlamentario se oponga a su admisión y ésta comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se transige.

Art. 119.

Terminado el debate de un proyecto, si, como consecuencia de la aprobación de un voto particular o de una enmienda o de la votación de los artículos, el texto resultante pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos, la Mesa de las Cortes podrá, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, enviar el texto aprobado por el Pleno de nuevo a la Comisión con el único fin de que ésta, en el plazo de quince días, efectúe una redacción armónica que deje a salvo los acuerdos del Pleno. El dictamen así redactado se someterá a la decisión final del Pleno, que deberá aprobarlo o rechazarlo en su conjunto, en una sola votación.

SECCION II. DE LAS PROPOSICIONES DE LEY

Art. 120.

Las proposiciones de ley podrán presentarse por un Grupo Parlamentario con la firma del Portavoz, o por un Procurador con la firma de otros once Procuradores, e irán acompañadas de una exposición de motivos y los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas.

Art. 121.

1. Ejercitada la iniciativa, la Mesa de las Cortes ordenará la publicación de la proposición de ley y su remisión a la Junta de Castilla y León para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración así como su conformidad o no a la tramitación, si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio.

2. Transcurridos quince días sin que la Junta de Castilla y León manifieste su criterio o niegue expresamente su conformidad a su tramitación, en el supuesto de implicar aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.

3. Antes de iniciar el debate, se dará lectura al criterio de la Junta de Castilla y León si lo hubiere. El debate se ajustará a lo establecido para los de totalidad.

4. Acto seguido, el Presidente preguntará si las Cortes toman o no en consideración la proposición de ley de que se trate. En caso afirmativo, la Mesa de las Cortes acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas, sin

que sean admisibles enmiendas a la totalidad de devolución. La proposición seguirá el trámite previsto para los proyectos de ley, correspondiendo a uno de los proponentes o a un Procurador del Grupo autor de la iniciativa la presentación de la misma ante el Pleno.

SECCION III. DE LA RETIRADA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Art. 122.

La Junta de Castilla y León podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación ante las Cortes, siempre que no hubiere recaído acuerdo final de éstas.

Art. 123.

La iniciativa de retirada de una proposición de ley por su proponente tendrá pleno efecto por sí sola, si se produce antes del acuerdo de la toma en consideración. Adoptado éste, la retirada sólo será efectiva si la acepta el Pleno de las Cortes.

CAPITULO III

De las especialidades en el procedimiento legislativo

SECCION I. DE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CASTILLA Y LEON

Art. 124.

1. Los proyectos y proposiciones de reforma estatutaria a la que se refiere el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se tramitarán de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- 1º La iniciativa corresponde a las Cortes de Castilla y León, a propuesta de una tercera parte de los miembros de las mismas, a la Junta de Castilla y León o a las Cortes Generales.
- 2º La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes de Castilla y León por mayoría de dos tercios y la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
- 3º Si la propuesta de reforma no es aprobada por las Cortes de Castilla y León o por las Cortes Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación de aquéllas hasta que haya transcurrido más de un año.

2. En los proyectos y proposiciones formuladas al amparo del artículo 29. 2. a) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el acuerdo de aprobación de las Cortes de Castilla y León deberá adoptarse por mayoría absoluta.

3. Aprobadas las propuestas a que se refieren los apartados anteriores, el Presidente de las Cortes de Castilla y León las remitirá a las Cortes Generales para su tramitación ulterior.

SECCION II. DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE CASTILLA Y LEON

Art. 125.

1. En el examen, enmienda y aprobación de los presupuestos se aplicará el procedimiento legislativo común, salvo lo dispuesto en la presente sección.

2. El proyecto de Ley de Presupuestos gozará de preferencia en la tramitación con respecto a los demás trabajos de las Cortes.

3. Las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos que supongan aumento de crédito en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección.

4. Las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos que supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad de la Junta de Castilla y León para su tramitación.

Art. 126.

1. El debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos tendrá lugar en el Pleno de las Cortes. En dicho debate quedarán fijadas las cuantías globales de los estados de los presupuestos. Una vez finalizado este debate, el proyecto será inmediatamente remitido a la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio.

2. El debate de los Presupuestos se referirá al articulado y al estado de autorización de gastos. Todo ello sin perjuicio del estudio de otros documentos que deban acompañar a aquél según la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León y la restante legislación vigente.

3. El Presidente de la Comisión y el de las Cortes, de acuerdo con sus respectivas Mesas, podrán ordenar los debates y las votaciones en la forma que más se acomode a la estructura de los Presupuestos.

4. El debate final de los Presupuestos en el Pleno de las Cortes se desarrollará diferenciando el conjunto del articulado de la Ley y cada una de sus secciones.

Art. 127.

Las disposiciones de esta sección también son de aplicación para la tramitación y aprobación por parte de las Cortes de los Presupuestos de los Entes Públicos y de la Junta de Castilla y León, para los cuales se establezca la necesidad de aprobación de las Cortes.

SECCION III. DE LA TRAMITACION EN LECTURA UNICA

Art. 128.

1. La Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, podrá proponer al Pleno de las Cortes la tramitación en lectura única de un proyecto de ley o de una proposición de ley, tomada en consideración, cuando su

naturaleza lo aconseje o la simplicidad de su formulación lo permita.

2. Adoptado el acuerdo por el Pleno, se procederá a un debate sujeto a las normas establecidas para los de totalidad y, a continuación, el conjunto del texto se someterá a una sola votación.

3. Si el resultado de la votación es favorable, el texto quedará aprobado. En caso contrario, quedará rechazado.

TITULO VI

PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS ESPECIALES

Art. 129.

1. La elaboración de proposiciones de ley que deban presentarse a la Mesa del Congreso de los Diputados a que se refieren los números 6 y 8 del artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, así como la solicitud al Gobierno del Estado de la adopción de un proyecto de ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 87. 2 de la Constitución, se harán de acuerdo con lo ordenado por este Reglamento para el procedimiento legislativo ordinario.

2. Las proposiciones de ley y las solicitudes de proyectos de ley a que se refiere el apartado anterior deberán ser aprobados en votación final por el Pleno de las Cortes de Castilla y León por mayoría absoluta de sus miembros.

3. Para la designación de los Procuradores que hayan de defender las proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados, según lo que se estipula en el número 6 del artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cada Procurador escribirá un nombre en la papeleta correspondiente. Resultarán elegidos, hasta un máximo de tres, en el número que previamente fijará la Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces, los Procuradores que habiéndose pronunciado afirmativamente en la votación final de la iniciativa hayan obtenido más votos. Si fuera preciso, la votación se repetirá para resolver empates, en los casos en que esto sea necesario.

TITULO VII

DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACION CON OTRAS COMUNIDADES

Art. 130.

1. La ratificación de los convenios y acuerdos de cooperación previstos en el artículo 145. 2 de la Constitución y en los artículos 13, 30 y disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía se ajustará al procedimiento previsto en este Reglamento para los proyectos de ley, con las particularidades que se contienen en el presente artículo.

2. Las propuestas presentadas por los Procuradores y por los Grupos Parlamentarios tendrán la consideración de enmiendas a la totalidad en los siguientes casos:

- 1º Cuando pretendan la denegación o el aplazamiento del acuerdo o convenio cuya ratificación se solicita.
- 2º Cuando propusieran reservas o declaraciones y éstas no estuviesen previstas por el acuerdo o convenio.
3. Las propuestas presentadas por los Procuradores y los Grupos Parlamentarios tendrán la consideración de enmiendas al articulado en los siguientes casos:
 - 1º Cuando propusieran la supresión, adición o modificación a las reservas o declaraciones que la Junta de Castilla y León pretendiere formular.
 - 2º Cuando formularen reservas o declaraciones previstas por el acuerdo o convenio.
4. En todo caso, la ratificación de los convenios y acuerdos de cooperación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes de Castilla y León en una votación final de conjunto.

TITULO VIII DEL OTORGAMIENTO Y RETIRADA DE LA CONFIANZA

CAPITULO PRIMERO

De la Investidura

Art. 131.

De conformidad con el artículo 15. 1 del Estatuto de Autonomía, el Presidente de la Junta de Castilla y León será elegido por las Cortes de Castilla y León de entre sus miembros, y nombrado por el Rey.

Art. 132.

1. El Presidente de las Cortes, previa consulta a los Portavoces designados por los partidos, grupos políticos o coaliciones electorales con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. La propuesta deberá formularse como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes o el cese del Presidente.

2. La sesión comenzará por la lectura de la propuesta por uno de los Secretarios de las Cortes.

3. A continuación, el candidato propuesto expondrá, sin limitación de tiempo, el programa del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de las Cortes de Castilla y León.

4. Tras la interrupción decretada por la Presidencia, en todo caso no inferior a veinticuatro horas, intervendrá un representante de cada Grupo Parlamentario o, en su defecto, de cada grupo político o coalición electoral con representación parlamentaria, por un tiempo de treinta minutos.

5. El candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Cuando conteste individualmente a uno de los intervinientes, éste tendrá derecho a réplica por diez minutos. Si el candidato les contestara en forma

global, cada uno de ellos tendrá derecho a una réplica de diez minutos.

6. La votación se llevará a efecto previa fijación de hora por la Presidencia.

7. De acuerdo con el artículo 15. 2 del Estatuto de Autonomía, para ser elegido Presidente de la Junta de Castilla y León, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación. Si no se alcanzase esa mayoría, la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijará el momento de la segunda votación, resultando elegido el candidato si obtuviere el voto favorable de la mayoría simple. Antes de proceder a esta votación, el candidato podrá intervenir por tiempo máximo de diez minutos y los Grupos Parlamentarios por cinco minutos cada uno para fijar su posición.

8. Si en las votaciones a que se refiere el artículo anterior la Cámara no hubiera otorgado su confianza se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo procedimiento.

9. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza de las Cortes de Castilla y León, éstas quedarán automáticamente disueltas. El Presidente cesante de las Cortes lo comunicará al Presidente de la Junta en funciones para que convoque nuevas elecciones. No obstante no tendrá lugar la disolución anteriormente indicada cuando el plazo de dos meses concluya en el último año de la legislatura.

10. Obtenida la investidura, conforme a los apartados anteriores, el Presidente de las Cortes lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento como Presidente de la Junta de Castilla y León, y al Gobierno de la Nación.

CAPITULO II

De la Moción de Censura

Art. 133.

Las Cortes de Castilla y León pueden exigir la responsabilidad política de la Junta de Castilla y León, conforme a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, mediante la adopción de una moción de censura.

Art. 134.

1. La moción deberá ser propuesta, al menos, por el quince por ciento de los Procuradores, en escrito motivado dirigido a la Mesa de las Cortes, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León que haya aceptado la candidatura.

2. La Mesa de las Cortes, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos señalados en el número anterior, la admitirá a trámite, dando cuenta inmediata de su presentación al Presidente de la Junta y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios.

3. Dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán formularse mociones alterna-

tivas que deberán reunir los requisitos señalados en el número 1 de este artículo y estarán sometidas a los mismos trámites de admisión señalados en el apartado precedente.

Art. 135.

1. El debate se iniciará por la defensa de la moción de censura que, sin limitación de tiempo, efectúe uno de los Procuradores firmantes de la misma. Seguidamente y asimismo sin limitación de tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto en la moción para la Presidencia de la Junta, a efectos de exponer el programa político del gobierno que pretende formar.

2. Tras la interrupción decretada por la Presidencia, en todo caso no inferior a veinticuatro horas, podrán intervenir los Grupos Parlamentarios que lo soliciten por tiempo de treinta minutos. Todos los intervinientes tienen derecho a un turno de réplica o rectificación de diez minutos.

3. Cuando se hubiera presentado más de una moción de censura, el Presidente de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de todas las incluidas en el orden del día, pero habrán de ser puestas a votación por separado, siguiendo el orden de su presentación.

4. La moción o mociones de censura serán sometidas a votación a la hora que, previamente, haya sido anunciada por la Presidencia y que no podrá ser anterior al transcurso de cinco días desde la presentación de la primera en el Registro General.

5. La aprobación de una moción de censura requerirá, en todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes de Castilla y León.

6. Si se aprobase una moción de censura, no se someterán a votación las restantes que se hubiesen presentado.

Art. 136.

Cuando las Cortes aprueben una moción de censura, su Presidente lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Rey, del Presidente de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de la Nación. El candidato a la Presidencia de la Junta incluido en aquélla se considerará investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía.

Art. 137.

Ninguno de los firmantes de una moción de censura podrá presentar otra mientras no transcurra un año desde la presentación de aquélla, dentro de la misma legislatura.

TITULO IX

DEL IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCION DE GOBIERNO

CAPITULO I

Del examen y debate de comunicaciones, programas, planes e informaciones de la Junta de Castilla y León

SECCION I. DE LAS COMUNICACIONES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Art. 138.

1. Cuando la Junta de Castilla y León remitiera a las Cortes una comunicación para su debate, que se podrá hacer ante el Pleno o en Comisión, aquél se iniciará con la intervención de un miembro de la Junta, tras la cual cada Grupo Parlamentario podrá hacer uso de la palabra por un tiempo máximo de quince minutos.

2. Los miembros de la Junta de Castilla y León podrán contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupadas por razón de la materia. Todos los intervinientes podrán disponer de un turno de réplica durante un plazo máximo de diez minutos cada uno.

Art. 139.

1. Terminado el debate, la Presidencia, oídos los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, abrirá un plazo mínimo de treinta minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante la Mesa propuestas de resolución. La Mesa admitirá las propuestas que sean congruentes con la materia objeto del debate.

2. Las propuestas admitidas podrán ser defendidas durante un tiempo máximo de diez minutos. El Presidente podrá conceder un turno en contra por el mismo tiempo tras la defensa de cada una de ellas.

3. Las propuestas de resolución serán votadas según el orden de presentación, salvo aquellas que signifiquen el rechazo global del contenido de la comunicación de la Junta, que se votará en primer lugar.

SECCION II. DEL EXAMEN DE LOS PROGRAMAS O PLANES REMITIDOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Art. 140.

1. Si la Junta de Castilla y León remitiera un programa o plan de actuación requiriendo el pronunciamiento de las Cortes, la Mesa ordenará su envío a la Comisión competente.

2. La Mesa de la Comisión organizará la tramitación y fijará plazo de la misma. Asimismo, podrá acordar la creación de una Ponencia que estudie el programa o plan en cuestión. El debate en la Comisión se ajustará a lo previsto en la sección anterior, entendiéndose que el plazo para la presentación de propuestas de resolución será de cinco días, si la Mesa de las Cortes hubiera decidido que aquéllas deban debatirse en el Pleno de las mismas.

Art. 141.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta de Castilla y León podrá remitir un programa o plan de actuación para que, previo debate en el Pleno, las Cortes se pronuncien sobre su aceptación o rechazo en los términos que finalmente proponga la Junta.

2. El desarrollo del debate se ajustará a lo dispuesto en el artículo 138.

SECCION III. DE LAS INFORMACIONES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Art. 142.

1. Los miembros de la Junta de Castilla y León comparecerán ante cualquiera de las Comisiones de las Cortes para celebrar sesiones informativas a petición propia.

2. Los miembros y altos cargos de la Junta de Castilla y León comparecerán asimismo cuando lo solicite una Comisión o su respectiva Mesa.

3. Un Grupo Parlamentario o la quinta parte de los miembros de una Comisión podrán también requerir la presencia de los miembros y altos cargos de la Junta de Castilla y León para que informen de los asuntos de su competencia. Las solicitudes deberán presentarse mediante escrito dirigido a la Mesa de las Cortes.

4. El desarrollo de la sesión constará de las siguientes fases: exposición oral del compareciente, suspensión por un tiempo mínimo de quince minutos para que los Grupos Parlamentarios y Procuradores puedan preparar la formulación de preguntas u observaciones, y posterior contestación de éstas por el miembro o alto cargo de la Junta. Podrán utilizar sendos turnos de réplica y dúplica. Intervendrán primero los Grupos Parlamentarios, a continuación los Procuradores de la Comisión que no hayan actuado como Portavoces de los Grupos y, finalmente, los Procuradores presentes que no sean miembros de la Comisión.

5. Los miembros y altos cargos de la Junta podrán comparecer, a estos efectos, asistidos de autoridades y funcionarios de sus Consejerías.

Art. 143.

1. Los miembros de la Junta, a petición propia o por acuerdo de la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, deberán comparecer ante el Pleno para informar sobre un asunto determinado. La iniciativa para la adopción de tal acuerdo corresponderá a un Grupo Parlamentario o a la quinta parte de los miembros de las Cortes.

2. Después de la exposición oral de la Junta, podrán intervenir los representantes de cada Grupo Parlamentario por diez minutos, fijando posiciones, formulando preguntas o haciendo observaciones, a las que contestará aquélla sin ulterior votación.

3. En casos excepcionales, la Presidencia podrá, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, abrir un turno para que los Procuradores puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. El Presidente, al efecto, fijará el número de intervenciones y el tiempo máximo de las mismas.

4. Los miembros de la Junta podrán intervenir ante el Pleno para ofrecer informaciones de actualidad presentando la oportuna petición con la antelación que fije la Mesa

de las Cortes. De dicha petición se dará traslado inmediato a los Grupos Parlamentarios. El desarrollo de esta iniciativa se ajustará a lo previsto en el apartado 2 de este artículo.

CAPITULO II

Del control sobre las disposiciones de la Junta de Castilla y León con fuerza de ley

Art. 144.

1. La Junta, tan pronto como hubiese hecho uso de la delegación prevista en el artículo 14. 2 del Estatuto de Autonomía, dirigirá a las Cortes la correspondiente comunicación que contendrá el texto articulado o refundido objeto de aquélla y que será publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

2. Si dentro del mes siguiente a la publicación del texto articulado o refundido, ningún Procurador o Grupo Parlamentario formulase objeciones, se entenderá que la Junta ha hecho un uso correcto de la delegación legislativa.

3. Si en el espacio de tiempo referido se formulara alguna objeción a la delegación a través de un escrito dirigido a la Mesa de las Cortes, ésta lo remitirá a la Comisión competente de las mismas, que deberá emitir dictamen en el plazo que se señalará.

4. El dictamen se debatirá en el Pleno de las Cortes según las normas generales del procedimiento legislativo. A este efecto, toda observación será considerada como una enmienda.

5. Los efectos jurídicos del control serán los previstos en la Ley de Delegación.

CAPITULO III

De las interpelaciones, mociones y preguntas

SECCION I. DE LAS INTERPELACIONES

Art. 145.

Los Procuradores y los Grupos Parlamentarios podrán formular interpelaciones a la Junta de Castilla y León y a cada uno de sus miembros.

Art. 146.

1. Las interpelaciones habrán de presentarse por escrito ante la Mesa de las Cortes y versarán sobre los motivos o propósitos de la actuación del ejecutivo en cuestión de política general, bien de la Junta o de alguna Consejería.

2. La Mesa calificará el escrito y en caso de que su contenido no sea propio de una interpelación, conforme a lo establecido en el apartado precedente, lo comunicará a su autor para su conversión en pregunta con respuesta oral o por escrito.

Art. 147.

1. Transcurridos siete días desde la publicación de la

interpelación, la misma estará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno.

2. Las interpelaciones se incluirán en el orden del día, dando prioridad a las de los Procuradores de Grupos Parlamentarios o a las de los propios Grupos Parlamentarios que, en el correspondiente periodo de sesiones, no hubieran consumido el cupo resultante de asignar una interpelación por cada tres Procuradores o fracción pertenecientes al mismo Grupo. Sin perjuicio del mencionado criterio, se aplicará el de la prioridad en la presentación. En ningún orden del día podrán incluirse más de tres interpelaciones de un mismo Grupo Parlamentario.

3. Finalizado un periodo de sesiones, las interpelaciones pendientes se tramitarán como preguntas con respuesta por escrito, que deben contestarse antes de la iniciación del siguiente periodo, salvo que el Procurador o Grupo Parlamentario interpelante manifieste su voluntad de mantener la interpelación para dicho periodo.

Art. 148.

1. Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno como máximo en la segunda sesión plenaria después de publicadas, dando lugar a un turno de exposición por el autor de la interpelación, a la contestación de la Junta de Castilla y León y a los turnos de réplica y dúplica. Las primeras intervenciones no podrán exceder de diez minutos, ni las segundas de cinco.

2. Después de la intervención del interpelante e interpelado, podrá hacer uso de la palabra un representante de cada Grupo Parlamentario, por término de cinco minutos para fijar su posición.

3. Finalizada la intervención de los Grupos Parlamentarios, interpelante e interpelado podrán hacer uso de la palabra por un tiempo máximo de cinco minutos cada uno.

Art. 149.

1. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en que las Cortes manifiesten su posición.

2. El Grupo Parlamentario interpelante, o aquél al que pertenezca el firmante de la interpelación, o éste, con la firma de su Portavoz, deberá presentar la moción en los tres días siguientes al de la sustanciación de aquélla en el Pleno. La moción, una vez admitida por la Mesa, se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, pudiendo presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la misma. La Mesa admitirá la moción si es congruente con la interpelación.

3. El debate y la votación se realizarán de acuerdo con lo establecido para las proposiciones no de ley.

4. En caso de que la moción prosperase:

1º. La Comisión a la que corresponde por razón de la materia controlará su cumplimiento.

2º. La Junta de Castilla y León, acabado el plazo que se fijará para dar cumplimiento a la moción, dará

cuenta del mismo ante la Comisión a la que se refiere el apartado anterior.

3º. Si la Junta de Castilla y León incumpliese la moción o si no diese cuenta a la Comisión, el asunto se incluirá en el orden del día del próximo Pleno que celebren las Cortes.

SECCION II. DE LAS PREGUNTAS

Art. 150.

Los Procuradores podrán formular preguntas a la Junta y a cada uno de sus miembros sobre cuestiones de competencia o de interés directo para la Comunidad Autónoma. Las preguntas que consideren de actualidad los Procuradores para ser incluidas en la primera Sesión Plenaria que se celebre deberán ser presentadas con la antelación que fije la Mesa. Admitidas y aceptadas como de actualidad, la Mesa dará traslado inmediato a la Junta de Castilla y León.

Art. 151.

1. Las preguntas habrán de presentarse mediante escrito dirigido a la Mesa de las Cortes.

2. No será admitida la pregunta de interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada, ni la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica.

3. La Mesa calificará el escrito y admitirá la pregunta si se ajusta a lo establecido en la presente sección.

Art. 152.

En defecto de indicación, se entenderá que quien formula la pregunta solicita la respuesta por escrito y, si solicitara la respuesta oral, sin más especificaciones, se entenderá que ésta tendrá lugar en la Comisión correspondiente.

Art. 153.

1. Cuando se pretenda la respuesta oral ante el Pleno, el escrito no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una situación o una información, sobre si la Junta ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con el asunto, o si va a remitir a las Cortes algún documento o a informarle acerca de algún extremo. Los escritos se presentarán con la antelación que fije la Mesa.

2. Las preguntas que la Mesa considere como preguntas de actualidad deberán ser incluidas en el orden del día. Las restantes preguntas se incluirán en el orden del día, dando prioridad a las presentadas por Procuradores que todavía no hubieran formulado preguntas en el Pleno en el mismo periodo de sesiones. Sin perjuicio de este criterio, el Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces, señalará el número de preguntas a incluir en el orden del día de cada sesión plenaria y el criterio de distribución entre Procuradores correspondientes a cada Grupo Parlamentario.

3. En el debate, tras la escueta formulación de la pregunta por el Procurador, contestará el Presidente o

Consejero. Aquél podrá intervenir a continuación para replicar o preguntar y, tras la nueva intervención de la Junta, terminará el debate. Los tiempos se distribuirán por el Presidente y los intervinientes, sin que en ningún caso la tramitación de la pregunta pueda exceder de cinco minutos. Terminado el tiempo de una intervención, el Presidente automáticamente dará la palabra a quien deba intervenir a continuación o pasará a la cuestión siguiente.

4. La Junta podrá solicitar, motivadamente, en cualquier momento y por una sola vez respecto de cada pregunta, a excepción de aquéllas calificadas de actualidad, que sea pospuesta para el orden del día de la siguiente sesión plenaria. Finalizado un periodo de sesiones las preguntas pendientes decaerán, salvo que se reitere expresamente su mantenimiento para el siguiente periodo de sesiones.

Art. 154.

1. Las preguntas respecto de las que se pretende respuesta oral en Comisión estarán en condiciones de ser incluidas en el orden del día, una vez transcurridos siete días desde su publicación.

2. Se tramitarán conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo anterior, con la particularidad de que las primeras intervenciones serán por tiempo de diez minutos y las de réplica de cinco. Asimismo, terminadas las intervenciones anteriores, se abrirá un turno en el que, los Procuradores de la Comisión, podrán solicitar aclaraciones sobre el tema de la pregunta, que serán contestadas en un único turno. Podrán comparecer para responderlas los Consejeros, Secretarios Generales o Directores Generales.

3. Finalizado un periodo de sesiones, las preguntas pendientes se tramitarán como preguntas con respuesta por escrito, que se deben contestar antes de la iniciación del siguiente periodo de sesiones.

Art. 155.

1. La contestación por escrito a las preguntas deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes a su publicación, pudiendo prorrogarse este plazo, a petición motivada de la Junta de Castilla y León, y por acuerdo de la Mesa de las Cortes, por otro plazo de hasta veinte días más.

2. Si la Junta de Castilla y León no enviara la contestación en dicho plazo, el Presidente de las Cortes, a petición del autor de la pregunta, ordenará que se incluya en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión competente, donde recibirá el tratamiento de las preguntas orales, dándose cuenta de tal decisión a la Junta de Castilla y León.

SECCION III. NORMAS COMUNES

Art. 156.

La semana en que exista sesión ordinaria del Pleno, se dedicará una parte de ésta a preguntas e interpelaciones, si las hubiere.

Art. 157.

1. El Presidente de las Cortes está facultado para acu-

mular y ordenar que se debatan simultáneamente las interpelaciones o preguntas incluidas en un orden del día y relativas al mismo tema o a temas conexos entre sí.

2. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá declarar no admisibles a trámite aquellas preguntas e interpelaciones cuyo texto incurra en los supuestos contemplados en el número 1º del artículo 102 de este Reglamento.

CAPITULO IV

De las Proposiciones No de Ley

Art. 158.

Los Grupos Parlamentarios o un Procurador con la firma de su Portavoz a efectos de conocimiento podrán presentar proposiciones no de ley a través de las que formulen propuestas de resolución a las Cortes.

Art. 159.

1. Las proposiciones no de ley deberán presentarse mediante escrito dirigido a la Mesa de las Cortes, que decidirá sobre su admisibilidad, ordenará, en su caso, la publicación y acordará la tramitación ante el Pleno, o Comisión competente en función de la importancia de los temas objeto de la proposición y la voluntad del proponente.

2. Publicada la proposición no de ley, podrán presentarse enmiendas por los Grupos Parlamentarios hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

3. Para la inclusión de las proposiciones no de ley en el orden del día del Pleno, se estará a lo dispuesto respecto de las interpelaciones en el apartado 2 del artículo 147 de este Reglamento.

Art. 160.

1. La proposición no de ley será objeto de debate que comenzará con su presentación por el proponente. A continuación se procederá a la defensa de las enmiendas, si las hubiera. Cada una de las enmiendas presentadas podrá dar lugar a un turno en contra. Terminado el debate de las enmiendas, podrán intervenir para fijar posiciones los Grupos Parlamentarios que aún no hubieran tomado la palabra. El proponente fijará entonces el texto definitivo de la resolución que propone. Si el texto final de la propuesta de resolución contuviera variaciones sobre el inicialmente presentado, cualquier Grupo Parlamentario podrá solicitar la palabra para manifestar su posición definitiva sobre el mismo. Sin permitir nuevas intervenciones, la Presidencia someterá a votación la proposición no de ley en los términos fijados por el proponente en su intervención final.

2. Si no hubiera enmiendas, la presentación por el proponente podrá dar lugar a un turno en contra y al de fijación de posiciones y cerrará el debate el proponente.

3. Si la proposición no de ley se tramitara ante el Pleno, cada una de las intervenciones señaladas en los apartados

anteriores tendrá una duración máxima de cinco minutos. Si se tramitara ante la Comisión, los turnos de palabra no podrán exceder de diez minutos.

4. El Presidente de las Cortes o de la Comisión, de acuerdo con la Mesa respectiva, podrá acumular a efectos de debate las proposiciones no de ley relativas a un mismo tema o a temas conexos entre sí. Esta misma facultad podrá ser ejercida por el Presidente de las Cortes o de la Comisión respecto al debate de las enmiendas presentadas a una proposición no de ley.

TITULO X

DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Art. 161.

A iniciativa de un Grupo Parlamentario o por decisión de la Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, el Pleno de las Cortes, o en su caso la Diputación Permanente, podrán adoptar por mayoría absoluta las resoluciones siguientes: 1ª Interponer los recursos de inconstitucionalidad a que se refiere el apartado 7 del artículo 13 del Estatuto de Autonomía. 2ª Instar a la Junta de Castilla y León a que se persone en los conflictos de competencia en los términos establecidos en el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía.

TITULO XI

DE LA DESIGNACION DE SENADORES

Art. 162.

El Pleno de las Cortes designará los Senadores que representarán a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el Senado, de acuerdo con el artículo 13. 5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, siguiendo el procedimiento legalmente establecido al efecto.

TITULO XII

DE LOS ASUNTOS EN TRAMITE A LA TERMINACION DEL MANDATO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON.

Art. 163.

Expirado el mandato o producida la disolución de las Cortes de Castilla y León, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquéllos de los que tenga que conocer su Diputación Permanente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de

Castilla y León. También se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Segunda.- La reforma del presente Reglamento se tramitará por el procedimiento establecido para las proposiciones de ley. Su aprobación requerirá mayoría absoluta, en una votación final de totalidad.

Tercera.- Los derechos, deberes, situaciones, funciones y competencias de los funcionarios al servicio de las Cortes de Castilla y León serán determinados por el Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León, cuya elaboración, aprobación y modificación corresponde a la Mesa.

Cuarta.- Siempre que este Reglamento exija una parte o porcentaje de los miembros de las Cortes o de las Comisiones para alcanzar un quorum o llevar a cabo una iniciativa y el cociente resultante no sea un número entero, las fracciones obtenidas se corregirán por exceso.

Quinta.- El Reglamento del Congreso de los Diputados regirá como derecho supletorio en todo lo que no esté específicamente regulado por este Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Unica.- 1. La tramitación de cualquier asunto pendiente ante las Cortes de Castilla y León a la entrada en vigor del presente Reglamento se ajustará a lo dispuesto en él respecto del trámite o trámites pendientes.

2. No obstante, los procedimientos legislativos en los que el plazo de presentación de enmiendas hubiera concluido con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, seguirán los trámites previstos en el Reglamento que éste viene a sustituir.

DISPOSICION DEROGATORIA

Con la aprobación y entrada en vigor del presente Reglamento queda derogado el Reglamento de las Cortes de Castilla y León de 16 de marzo de 1984. Asimismo, quedan derogadas las normas de carácter reglamentario aprobadas al amparo de aquél en cuanto se opongan o redunden con lo establecido en este Reglamento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 15 de Febrero de 1990, acordó la Modificación de los Apartados 2 y 6 del Artículo 60 del Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León en los términos que a continuación se insertan.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: *Carlos Sánchez-Reyes de Palacio*

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: *Juan C. Elorza Guínea*

**MODIFICACION DE LOS APARTADOS 2 Y 6 DEL
ARTICULO 60 DEL ESTATUTO DE PERSONAL DE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON**

ARTICULO UNICO: 1. Se modifica el apartado 2 del artículo 60 del Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León de 8 de Marzo de 1985, que queda redactado en los siguientes términos:

“2. La Junta de Personal estará integrada por cinco miembros de su personal de plantilla que se hallen en situación de servicio activo, elegidos por sufragio general, libre, igual, directo y secreto entre quienes ostenten dicha condición”.

2. Se deroga el párrafo tercero del apartado 6 del artículo 60 del Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León de 8 de Marzo de 1985 que, en consecuencia, queda redactado en los siguientes términos:

“6. Los electores podrán votar hasta un máximo de tres candidatos.

Tras el cómputo de los votos, serán declarados electos los cinco funcionarios que tengan mayor número de votos. En caso de que se produjera empate para asignar el quinto puesto, se entenderá elegido el funcionario que haya prestado más tiempo de servicio efectivo en las Cortes. De persistir el empate, se resolverá a favor del funcionario de mayor edad”.

DISPOSICION FINAL: Las presentes normas entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

**IV. INTERPELACIONES, MOCIONES,
PREGUNTAS Y CONTESTACIONES**

Contestaciones

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 586-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a extremos relacionados con el reconocimiento de grado personal a funcionarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 108, de 20 de Octubre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: *Carlos Sánchez-Reyes de Palacio*

P.E. 586-II

RESPUESTA A LA PREGUNTA P.E. 586-I, FORMULADA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON POR EL PROCURADOR D. LEANDRO JAVIER MARTIN PUERTAS.

Las valoraciones y calificaciones descalificatorias emitidas por el Procurador preguntante en los antecedentes de esta pregunta, y que con frecuencia reitera en cuantas ocasiones se dirige a esta Consejería en petición de respuestas, en absoluto son compartidas por este Consejero.

En cuanto a las respuestas concretas solicitadas, se contesta lo siguiente:

La Resolución a que se refiere tiene fecha de 4 de Abril de 1989, detectado el error, fue subsanado por Resolución del Director General de la Función Pública el 1 de Junio de 1989, y este Consejero tomó posesión el 21 de Septiembre de 1989.

En cuanto a los proyectos de la Junta de Castilla y León sobre normas que regulen el procedimiento del reconocimiento del grado personal a los funcionarios se hace constar que es propósito de esta Junta afrontar el desarrollo reglamentario en materia de Función Pública cuando se disponga de la nueva Ley de Ordenación de Castilla y León, hoy en trámite parlamentario. No obstante, no es éste un problema urgente a resolver porque, como muy bien sabe el Procurador autor de la pregunta, es de aplicación supletoria el Real Decreto 2617/1985, y porque siendo la Ley de Ordenación de la Función Pública de Castilla y León de 7 de Diciembre de 1985, el Gobierno socialista de esta Junta dejó transcurrir año y medio sin desarrollar la Ley en esta materia.

Valladolid, a 5 de Febrero de 1990.

EL CONSEJERO

Fdo.: *César Huidobro Díez*

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 590-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a extremos relacionados con el percibo de retribuciones complementarias por personal laboral, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 109, de 30 de Octubre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: *Carlos Sánchez-Reyes de Palacio*

P.E. 590-II

RESPUESTA A LA PREGUNTA P.E. 590-I, FORMULADA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON POR EL PROCURADOR D. LEANDRO JAVIER MARTIN PUERTAS.

A la primera pregunta. — Sí

A la segunda pregunta. La afirmación de "clara vulneración de la Ley" es una apreciación subjetiva y gratuita del Procurador que pregunta, afirmación que este Consejero en modo alguno comparte.

A la tercera pregunta. La resolución del Secretario General a la que nos referimos fue informada como "conforme con la legislación vigente" por el Jefe de la Asesoría Jurídica General.

A la cuarta pregunta. La Junta, a través de la negociación de los Convenios Colectivos, viene fijando las retribuciones del personal laboral, lo cual ha conllevado unos crecimientos que, paradójicamente, en los debates sobre el Capítulo I de los Presupuestos han sido objeto de crítica por el propio Procurador que pregunta. Debiera saber el Sr. Procurador que el índice de crecimiento de la masa salarial se fija en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado con carácter vinculante para todas las Administraciones y que, no obstante ello, en esta Comunidad se viene arbitrando fondos para la negociación colectiva y estructuración de las Relaciones de Puestos de Trabajo reservados al personal laboral, fondos que persiguen una mayor homogeneización salarial y un desarrollo de los complementos de puesto.

Para una más completa información se adjunta el texto de la resolución objeto de la Pregunta.

Valladolid, a 5 de Febrero de 1990.

EL CONSEJERO

Fdo.: César Huidobro Díez

CLEMENTE SANZ BLANCO, SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL,

CONSIDERANDO QUE:

1. La disposición transitoria segunda de la Ley 7/1985, de 27 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Castilla y León, establece que "el personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la vigente Ley desempeñe puestos de trabajo reservados a funcionarios en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, podrán continuar en dicho puesto en situación de personal laboral a extinguir".
2. La Comisión de Retribuciones del Personal de la Junta de Castilla y León en su sesión de 8 de Mayo de 1989, estima de justicia que el personal a que se

refiere el apartado anterior sea retribuido adecuadamente.

3. Que los complementos retributivos asignados a un puesto de trabajo se devengan a favor de la persona que los desempeña, pues en otro caso se derivaría un enriquecimiento injusto para la Administración que, como viene ocurriendo con el personal laboral afectado por la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1985, abonaría exclusivamente las retribuciones personales correspondientes al Grupo profesional del personal laboral habilitado legalmente para el desempeño de puestos de funcionarios.

Vengo en resolver, de acuerdo con las facultades que me otorga el art. 3.º del D. 239/1987, de 29 de septiembre, como Jefe Superior de Personal de la Consejería por delegación del Consejero, que el personal laboral que viniera desempeñando puestos de funcionarios al amparo de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1985, de 27 de diciembre, devenga y tiene derecho a percibir las retribuciones complementarias asignadas a los puestos de funcionarios que desempeñen.

Valladolid, 27 de Julio de 1989.

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Clemente Sanz Blanco

Examinada la propuesta de Resolución del Secretario General de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, esta Asesoría Jurídica General, informa que es conforme con la legislación vigente en la materia.

Valladolid; 28 de julio de 1989.

EL JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA GENERAL

Fdo.: Pablo Trillo-Figueroa y Martínez Conde

ILMO SR. SECRETARIO GENERAL. CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMON. TERRITORIAL

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 593-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a nombramiento del Inspector General de Servicios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 109, de 30 de Octubre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON,

Fdo.: Carlos Sánchez-Reyes de Palacio

P.E. 593-II

RESPUESTA A LA PREGUNTA P.E. 593-I, FORMULADA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON POR EL PROCURADOR D. LEANDRO JAVIER MARTIN PUERTAS.

El ex-Director General de la Función Pública fue considerado como persona adecuada para cubrir la vacante de Inspector General de Servicios, por el procedimiento de adscripción provisional, ya que de no haberlo considerado así, ni el puesto se habría cubierto por el sistema de adscripción, ni el nombramiento hubiera sido el ex-Director General.

En la actualidad, el Inspector General de Servicios al que la pregunta se refiere, ha cesado en esta Administración a petición propia.

Valladolid, a 5 de Febrero de 1990.

EL CONSEJERO

Fdo.: *César Huidobro Díez*

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 601-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Angel F. García Cantalejo, relativa a terminación de las obras de acondicionamiento de los márgenes del río Eresma en el Barrio de San Lorenzo de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 113, de 20 de Noviembre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 31 de Enero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: *Carlos Sánchez-Reyes de Palacio*

P.E. 601-II

CONTESTACION A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL PROCURADOR D. ANGEL FERNANDO GARCIA CANTALEJO RELATIVA A TERMINACION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO ERESMA EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE SEGOVIA

La obra de Acondicionamiento de las Márgenes del Eresma y Ciguñuela (Segovia) pertenece al Programa de 1987, siendo contratada con fecha 30.12.87 por la cantidad de 33.800.000 pts. a la empresa PECUNE, S.A.

Las obras proyectadas consistían en el tratamiento de las márgenes del Eresma y Ciguñuela, manteniendo la

fisonomía natural del paisaje, creando un parque longitudinal de sendas y caminos de carácter "blando", con pocos elementos arquitectónicos, de fácil mantenimiento y resistencia a las agresiones meteorológicas y humanas.

El plazo de ejecución de las obras era de doce meses a partir de la fecha de comienzo de las mismas (16.02.88).

Durante la ejecución de la obras surgieron las siguientes circunstancias:

- 1.º Conveniencia de efectuar modificaciones en las pasarelas proyectadas en orden a la mejor adecuación a su futuro uso.
- 2.º Necesidad de resolver problemas de saneamiento de edificios adyacentes a la obra.
- 3.º Asentamientos presuntamente ilegales dentro del ámbito de la actuación.
- 4.º Interés en mejorar el aspecto de la zona mediante la hidrosiembra de determinados taludes.

Estas circunstancias son la causa de la paralización temporal que ha sufrido la obra, mientras se redactaba el correspondiente Proyecto Modificado, por importe de 6.293.796 Pts. con cargo a los presupuestos de 1989.

Actualmente la tramitación del expediente administrativo está terminada. En la actualidad las obras se han reanudado de conformidad con el contenido del Proyecto Modificado.

Valladolid, 25 de enero de 1990.

EL CONSEJERO

Fdo.: *José Luis Sagredo de Miguel*

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la Publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 603-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Lorenzo López Trigal, relativa a ocupación ilegal de la cañada real en Arcahueja (León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 113, de 20 de Noviembre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 31 de Enero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: *Carlos Sánchez-Reyes de Palacio*

P.E. 603-II

CONTESTACION A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL PROCURADOR D. LORENZO LOPEZ TRIGAL, RELATIVA A LA OCUPACION ILEGAL DE "LA CAÑADA REAL" EN ARCAHUEJA (LEON).

En la clasificación que se efectuó en 1957 de las vías pecuarias del término municipal de Valdefresno, al que pertenece el pueblo de Arcahueja, aparece descrita la Cañada Real Leonesa, a su paso por éste último, simplemente con la indicación de que "cruza por el Centro".

Tal imprecisión en la descripción de la vía pecuaria da lugar a dificultades, a veces insalvables, no sólo para actuaciones posteriores de la Administración contra las ocupaciones ilegales sino también para poder llevar a cabo el deslinde en tramos conflictivos, como ha ocurrido en el que se abordó en 1985 en el pueblo limítrofe de Vadela-fuente que tuvo que ser suspendido por la falta de documentos de los propietarios colindantes que permitieran establecer los límites de la misma vía pecuaria.

No obstante, están en fase de tramitación cinco denuncias, por ocupaciones recientes mediante cerramientos realizados con bloques prefabricados de hormigón y vallado metálico de terrenos que, a juicio de los funcionarios de la administración forestal, corresponden a la vía pecuaria mencionada.

Valladolid, 24 de enero de 1990.

EL CONSEJERO

Fdo.: José Luis Sagredo

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 610-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional en la provisión de vacantes en régimen de contratación laboral, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 119, de 18 de Diciembre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Carlos Sánchez-Reyes de Palacio

P.E. 610-II

RESPUESTA DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y A.T. A LA PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA P.E. 610-I, FORMULADA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON POR EL PROCURADOR D. LEANDRO J. MARTIN PUERTAS, RELATIVA A LA APLICACION DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA PROVISION DE VACANTES EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL.

Si bien respecto a la Ley 23/1988, de 28 de julio, de acuerdo con su artículo 15, apartado c), resulta la convoca-

toria de las citadas plazas a todas luces contraria a lo preceptuado por la Ley y no pueden ser desempeñadas por personal laboral ni siquiera como excepción, según informa el Jefe de Servicio de Personal de la Consejería de Cultura y Bienestar Social (se adjunta escrito a tal efecto solicitado), esta Convocatoria viene derivada de una relación anterior a la aparición de dicha Ley, incluso anterior a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987, motivadora, en cierta manera, de la Ley 23/1988, como es el Decreto 36/1987, de 20 de marzo, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de acuerdo con lo previsto y negociado con las Organizaciones Sindicales, que quedó plasmado en el Capítulo V del Convenio Colectivo entonces vigente, y que tras el Concurso de Traslado, y las Convocatorias Públicas de Puestos de Trabajo y Promoción Interna, la Administración se vió en la necesidad de convocar tales plazas en la forma primitivamente acordada, con anterioridad a la citada Ley 23/1988.

Valladolid, 2 de febrero de 1990.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y A.T.

Fdo.: César Huidobro Díez

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 613-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco Javier Paniagua Iñiguez, relativa a extremos relacionados con las informaciones sobre la firma de un crédito con el Banco Europeo de Inversiones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 119, de 18 de Diciembre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Carlos Sánchez-Reyes de Palacio

P.E.613-II

Exmo. Sr.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita P.E. 613-I, formulada por el Procurador D. F. Javier Paniagua Iñiguez del Grupo Parlamentario Socialista por la que solicita información sobre el destino, objeto, requisitos y características del crédito de 2.500 millones de pesetas suscrito en Luxemburgo, el pasado 29 de Noviembre, entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Banco Europeo de Inversiones, comunico a V.E. lo que sigue:

Efectivamente el pasado día 29 de Noviembre de 1989 se formalizó en Luxemburgo un préstamo de 2.500 millones de pesetas con el Banco Europeo de Inversiones (B.E.I.).

Este importe se incluye dentro del límite máximo de endeudamiento autorizado por la Ley 1/1989, de 10 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 1989.

Previamente a su formalización, se realizaron todas las gestiones para la obtención de las autorizaciones preceptivas para este tipo de operaciones y cuyo detalle es el siguiente:

- Acuerdo de la Junta de Castilla y León del día 28 de octubre de 1988 autorizando al Consejero de Economía y Hacienda para que iniciara la tramitación de una solicitud de crédito ante el BEI.
- Acuerdo del Consejo de Ministros del día 28 de julio de 1989 autorizando el préstamo.
- Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Banco de España en su sesión del día 6 de octubre de 1989 autorizando el préstamo y escrito del 11 de diciembre dando la conformidad a la ampliación del plazo de disposición.
- Acuerdo de la Junta de Consejeros del 2 de noviembre de 1989 autorizando la concertación del préstamo.

Por otra parte, esta Consejería va a informar a la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes, como escrupulosamente viene realizando periódicamente, de acuerdo con lo que dispone la Disposición Adicional Cuarta, letra h) de la Ley 1/1989, de 10 de febrero, de todas las operaciones de crédito realizadas durante el cuarto trimestre, entre las que se encuentra el préstamo con el BEI.

A. Destino y objeto

Cumpliendo estrictamente lo establecido en el artículo 14.2 a) de la LOFCA, el artículo 38.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el artículo 180.2 a) de la Ley de Hacienda de nuestra Comunidad y el artículo 30.1 de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 1989, el importe va a destinarse a financiar exclusivamente gastos de inversión. Así se recoge en todas las autorizaciones mencionadas anteriormente y la propia política del BEI exige que los préstamos sean destinadas a financiar proyectos de inversión.

De forma concreta, en el contrato de préstamo se especifica que el importe de éste va a servir para cofinanciar el proyecto denominado Infraestructura: Castilla-León, que se subdivide en dos subproyectos: forestal y de obras hidráulicas.

El coste total de este proyecto se estima en 5.076 millones de pesetas.

B. Requisitos.

Desde el punto de vista de la Comunidad, ésta ha cumplido con toda la normativa que se exige para proceder a una operación de endeudamiento, como ya se ha especificado en los puntos anteriores.

Desde el punto de vista del BEI, éste exige una serie de requisitos tanto relativos a la entidad jurídica del prestatario como a los requisitos de los proyectos concretos que financia. En ambos casos y después de los estudios y valoraciones llevados a cabo por el propio Banco, nuestra solicitud de crédito ha superado las condiciones que el BEI demanda para otorgar su financiación.

C. Características.

Importe:	2.500 millones de pesetas.
Régimen monetario:	Pesetas.
Duración:	15 años desde la firma del contrato.
Plazo de disposición:	15 meses, hasta el 28 de febrero de 1991.
Tipo de interés:	Fijo para toda la vida del préstamo y será el vigente del BEI para operaciones de similares características en las fechas de disposición de los fondos. Se pagarán por semestres vencidos.
Amortización:	En 22 semestralidades, la primera en mayo de 1994 y la última en noviembre de 2004.
Otras características:	Las normales del BEI para este tipo de operación.

Valladolid, 25 de Enero de 1990.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA

Fdo.: Miguel Pérez Villar

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.
Castillo de Fuensaldaña

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 615-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pedro San Martín Ramos, relativa a previsión sobre ayudas y cantidades a suprimir en los programas de la Operación Integrada de Desarrollo de Zamora y Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 119, de 18 de Diciembre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Carlos Sánchez-Reyes de Palacio

P.E. 615-II

Exmo. Sr.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita P.E. 615-I formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador del Grupo Parlamentario del Centro Democrá-

tico y Social, D. Pedro San Martín Ramos, en relación con los efectos de la reducción de las subvenciones del Fondo Social Europeo sobre los Proyectos de la Operación Integrada de Desarrollo Zamora-Salamanca, comunico a V.E., lo siguiente:

La Consejería de Economía y Hacienda presentó durante 1989 en la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo cuatro solicitudes de programas operativos al FSE por un importe total de 11.382,12 millones de pts. de ayuda Fondo, desglosados de la siguiente forma:

Objetivo n.º 1 (formación y empleo vinculados al desarrollo regional)	3.305,47
Objetivo n.º 3 (combatir el paro de larga duración)	1.659,58
Objetivo n.º 4 (inserción profesional de los jóvenes)	3.315,37
OID de Zamora y Salamanca	3.101,70

Una vez conocido el proyecto de Marco Comunitario de Apoyo para las regiones españolas del objetivo 1, aprobado el 31 de octubre del año pasado, se redujeron las cantidades solicitadas en los programas relativos a los objetivos 1, 3 y 4, en función de la ayuda del FSE fijada por dicho Marco para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, establecida en 4.814,82 millones de pts. para el período 1990-93 con el desglose siguiente:

Objetivo 1	2.452,57
Objetivo 3	790,17
Objetivo 4	1.572,08

En la actualidad están presentados los tres programas operativos una vez ajustados al Marco Comunitario de Apoyo, y al programa correspondiente a la OID. El interés principal de la solicitud del programa OID es la obtención de fondos comunitarios adicionales de acuerdo con la regulación anterior a la reforma de los fondos estructurales, tal como indicó la Administración Central en las diversas reuniones celebradas. Ante la duda de que esto no fuera así, al conocer el proyecto de Marco Comunitario de Apoyo, se dirigió una carta al Director General de Empleo con fecha 18 de octubre, con el fin de que aclarara la situación y de que se negociara la financiación de la OID con cargo a la dotación para "acciones transitorias" de que dispone la Comisión.

El Director de Empleo contestó el 6 de noviembre pasado indicando que daba traslado de la pregunta al Ministerio de Economía y Hacienda, responsable de la coordinación de las operaciones integradas. Ante la falta de respuesta de este Ministerio se le dirigió una carta el 13 de diciembre solicitando la aclaración de la situación. Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta oficial.

Sin embargo, en una reunión mantenida con el Director General de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda el pasado 12 de enero, a petición de esta Conse-

jería, y uno de cuyos fines era aclarar la situación de la OID, se comunicó verbalmente que ésta debía ser ejecutada con financiación incluida en el Marco Comunitario de Apoyo, sin que supusiera la obtención de financiación adicional.

En el momento actual, no parece oportuno proceder a un ajuste de la OID reduciendo su cuantía en la parte correspondiente al FSE, ante la falta de una confirmación oficial y por escrito del Ministerio sobre su inclusión en el Marco Comunitario de Apoyo, porque ni el Ministerio ni la Comisión han instado a ello, a pesar de las reiteradas consultas elevadas.

Sin embargo, en el caso más probable de que la ejecución de la OID no supusiera financiación adicional al Marco Comunitario de Apoyo, parece inviable la realización de la misma, con cargo a los 4.814,82 millones de pts. de Ayuda-Fondo previstos para la Comunidad Autónoma, dado que la ayuda FSE solicitada para esta Operación es de 3.101,7 millones, lo que supondría un grave desequilibrio para el resto de las provincias de la Comunidad, al absorber la OID más del 64% de la ayuda total regional.

Valladolid, a 23 de Enero de 1990.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA
Fdo.: Miguel Pérez Villar

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.
Castillo de Fuensaldaña

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 619-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Leandro Javier Martín Puertas, relativa a asistencia del Director General de la Función Pública y del Jefe del Servicio de Selección y Formación a un Seminario de Informática Básica en Madrid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 121, de 30 de Diciembre de 1989.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de Febrero de 1990.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Carlos Sánchez-Reyes de Palacio

P.E. 619-II

RESPUESTA A LA PREGUNTA P.E. 619-I, FORMULADA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN POR EL PROCURADOR D. LEANDRO JAVIER MARTIN PUERTAS.

El seminario de Informática al que asistieron el Director General de la Función Pública y el Jefe del Servicio de

Selección y Formación está diseñado y dirigido a las siguientes personas, como literalmente se hace constar en la oferta, "Dirección General, Secretaría General, Direcciones Funcionales, Jefes de Servicios usuarios de la informática, organizadores, Profesionales libres, Profesores y formadores de adultos". Esta simple denominación pone de manifiesto la adecuación del seminario y los asistentes al mismo. Y la indiscutida necesidad de poseer conocimientos elementales y básicos para el mejor desempeño de funciones de Dirección, coordinación y gestión justifica la asistencia al seminario de ambas personas, máxime si se tiene en cuenta las funciones propias de la Dirección General de la Función Pública.

El seminario fue impartido por la Empresa TEA-CEGOS. Lamentablemente no ha habido la oportunidad de disponer de oferta formativa en esta materia por parte del INAP, que de haber existido hubiera sido utilizada con preferencia absoluta. En cuanto al costo ha sido el de 230.000 pesetas para los dos asistentes (256.000 ptas.

menos 26.000 ptas. de bonificación por el segundo asistente). Naturalmente, no se ha determinado el costo por negociación, sino por adhesión, y es el propio del mercado para este tipo de acciones formativas.

Las indemnizaciones abonadas a los asistentes han sido las siguientes:

A) Director General: 23.400 ptas., por dietas.

0 ptas., por locomoción.

B) Jefe del Servicio: 34.880 ptas., por dietas (incluye alojamiento).

8.000 ptas. por locomoción.

La Consejería de Presidencia y Administración Territorial no ha considerado un despilfarro, sino una utilización adecuada de los recursos existentes.

Valladolid, a 5 de Febrero de 1990.

EL CONSEJERO

Fdo.: César Huidobro Díez

